

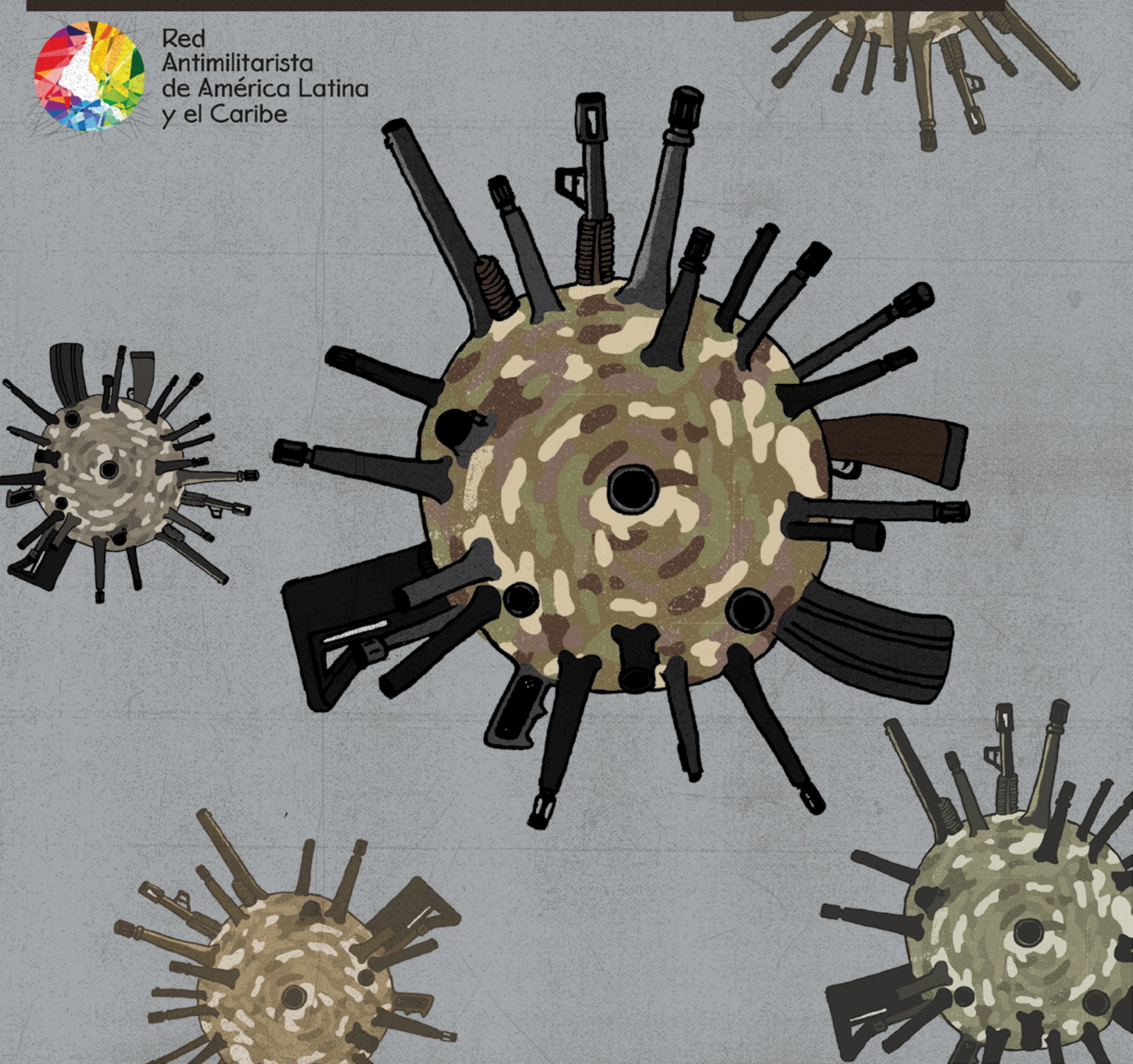
# RESISTENCIAS A LA MILITARIZACIÓN DE LAS SOCIEDADES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE EN TIEMPOS DE PANDEMIA

## COVID19

Segundo informe desde la Red Antimilitarista de América Latina  
y el Caribe. Ramal en tiempos de pandemia, mayo de 2020



Red  
Antimilitarista  
de América Latina  
y el Caribe





# **RESISTENCIAS A LA MILITARIZACIÓN DE LAS SOCIEDADES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE EN TIEMPOS DE PANDEMIA COVID19**

Segundo informe desde la Red Antimilitarista de América Latina  
y el Caribe, Ramalc en tiempos de pandemia, mayo de 2020

# ÍNDICE

Introducción .....	5
<b>desde Honduras</b>	
VIVIR AL DÍA <i>por Melissa Cardoza</i> .....	6
<b>desde Brasil</b>	
<i>Por Su mercé</i> .....	8
BRASIL E SEU ESTRANHO MILITARISMO DE GABINETE .....	11
NA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS <i>por Guilherme Falleiros</i>	
<b>desde Paraguay</b>	
PARAGUAY: RESISTENCIAS AL MILITARISMO COLORADO <i>por Caracolito</i> .....	15
<b>desde Chile</b>	
DE NUEVO LOS MILICOS EN LAS CALLES <i>por Roberto Fernández</i> .....	17
SHILE <i>por Marcela Paz</i> .....	18
EN UN PAÍS NUBLADO (CON PANDEMIA O SIN PANDEMIA) .....	19
NO SE PUEDEN BLANQUEAR LOS EJÉRCITOS <i>por Dan Contreras</i>	
<b>desde Costa Rica</b>	
COVID-19 Y LA EPIDEMIA DE LA MILITARIZACIÓN EN COSTA RICA <i>por José Solano</i> .....	22
<b>desde México</b>	
LA PANDEMIA DE LA MILITARIZACIÓN EN LA REGIÓN MEXICANA <i>por Coyote</i> .....	24
MILITARIZACIÓN POR DECRETO EN MÉXICO <i>por Ramalc en México</i> .....	28
<b>desde Colombia</b>	
CONTEXTO PANDEMIA MEDELLÍN <i>por Kolectivo Antimilitarista de Medellín</i> .....	31
RESISTENCIAS Y MILITARIZACIÓN <i>por Organizaciones Ramalc en Colombia</i> .....	32
LOS GRUPOS ARMADOS NO SE FUERON DE CUARENTENA EN COLOMBIA <i>por Martín Díaz</i> .....	37
<b>desde Venezuela</b>	
VENEZUELA, IMPERIALISMOS Y MILITARIZACIÓN <i>por Rafael Uzcategui</i> .....	39
SEGUNDO COMUNICADO SOBRE MILITARIZACIÓN Y COVID 19 <i>por Laboratorio de Paz</i> .....	42
<b>desde Bolivia</b>	
COVID-19: ENTRE EL GASTO MILITAR Y LOS CUIDADOS COLECTIVOS .....	44
<i>por Benjamin Tarqui – JEA 2.0 y Angela Cuenca – Colectivo CASA</i>	
<b>desde Ecuador</b>	
SITUACIÓN EN EL ECUADOR FRENTE AL COVID -19 <i>por Ramalc en Ecuador</i> .....	46
<b>desde Perú</b>	
MILITARIZACIÓN EN TIEMPOS DE COVID-19 (Parte 2) .....	47
<b>desde Argentina</b>	
SIGUEN AHÍ <i>por Cristian Marco</i> .....	52
<b>desde Uruguay</b>	
<i>por Ramalc</i> .....	53



# INTRODUCCIÓN

EN ESTE SEGUNDO BOLETÍN DE LA RAMALC SOBRE EL APROVECHAMIENTO DE LA PANDEMIA Covid19 por parte de los militarismos de América Latina y el Caribe estamos poniendo énfasis en la resistencia a esos militarismos y a todo aquello que los sostienen, justifican, alientan y usufructan en una alianza permanentemente actualizada contra los pueblos y las personas que los conforman. Hoy es la pandemia, mañana será la crisis, como antes fueron otras justificaciones mediáticas e ideológicas para seguir militarizándonos para hacernos obedientes hasta la muerte. A ese destino, nuestros pueblos resisten.

Este boletín surge en el marco del 15 de mayo Día Internacional de la Objeción de Conciencia y dan cuenta de lo sucedido en los meses de abril y mayo, complementando así al boletín anterior que daba cuenta de los sucesos de la pandemia en la región hasta el mes de marzo.

## desde Honduras

# VIVIR AL DÍA

APENAS ERA MARZO, CON SU ALGARABÍA DE CALOR y árboles florecidos, era el ocho de marzo y abrazábamos la vida de las mujeres hondureñas en un evento con cientos de mujeres en el parque central de Tegucigalpa, emocionadas y estresadas con todo, felices de la fuerza, de la diversa fuerza creciente de las que mueven el mundo.

Ni terminábamos de despedirnos bien cuando se acabó el tiempo de los abrazos. Ese acto tan hermoso de traer al cuerpo, el de la otra y juntar la historia, las pieles, los aromas. Y entonces todo cambió de una manera tan vertiginosa que cada día hay que volver a contar las marcas en el calendario para no perder de vista su ruta.

Esto es abril. El hermoso mes de canciones y poemas, lleno de primaveras y cumpleaños amados. Y sí, como nunca antes los pájaros recorren las ciudades y los campos engolosinados con una situación en la que los humanos no los persiguen ni les asustan. Proliferan las mariposas, y un cierto rumbo natural parece que recupera espacio y tiempo destruido por la humanidad que hoy delira de terror.

Nosotras hemos incorporado un tic tac en tiempo real que nos dice cuántos seres humanos han perdido su máspreciado privilegio de respirar, la suma crece y el miedo se expande por los países, lejos de pasaportes y de incómodas visas que nos recuerdan que los ricos gobiernan el mundo y nos dicen usted sí, usted no.

Miedo, a todo. A salir, a tocar, a respirar, a escuchar, a saber y a ignorar. Miedo como una pátina sobre las pieles y las pupilas. La furia que hasta hace poco crecía en Abya Yala de la mano de mujeres indignadas destrozando inservibles monumentos, derrotando nombres de héroes contemporáneos de una izquierda podrida, fue mandada a casa.

Quédate en casa, nos dicen por todos lados y la sonrisa del dictador, dueño único y demagógico de la escena, con su corte de payasos y payasas corruptos y sinvergüenzas nos hiere. Estamos en casa, algunas con sus opresores personales y violentos, temiendo y soportándoles.

Quienes podemos, lo hacemos conscientes de la necesidad de acopiar nuestras propias fuerzas porque llegar a un hospital es más probable causa de muerte que cualquier otra cosa. Quedarse en casa y darles gusto, sin una tan sola lacrimógena más, sintiéndonos colaboradoras, irresponsables, cobardes porque una histórica desconfianza nos hace entender lo que significa este sacarnos de la calle, de las relaciones, de la vida pública, y dejar a los gendarmes a sus anchas. Las mujeres sabemos la maldad que hay detrás del confinamiento doméstico obligado.

Las noches se alargan y los días como el virus atrapan los pulmones y cuesta respirar, aprieta la ansiedad de solo desear mirar a la gente, tomar café, discutir el cómo seguir adelante y abrazar a las amadas personas de la vida.

Toda la ciencia ficción se quedó corta. La peste, el dengue, el ébola, las insignificantes bacterias y virus que ya han derrotado pueblos enteros llegan hoy a la puerta de este mundo blanco y hasta ahora omnipotente, y encienden las luces de un escenario que suena a apocalipsis planetario porque hoy le toca a ese mundo que se creyó a salvo.

En el jardín florecido del autoritarismo, aquí en estas tierras donde lo que más vida cobra es el hambre, nos mandan a hacer cosas imposibles. No trabajar, estar sanas y tranquilas, no relacionarnos con nadie, descansar, y sobre todo olvidar. Lo que hubo antes y que estará después del único nombre que ocupa nuestras mentes. Olvidar que esto es una dictadura y que la corrupción es uno

de sus sellos, tal como lo vemos pasar ante nuestros ojos, con los respiradores, las mascarillas y guantes más caros del mundo, con sus políticas financieras para salvar a sus amigos banqueros y empresarios a costa de la deuda del pueblo hondureños, con sus hospitales preparados para ellos y ellas, los de siempre, protegidos por los infaltables en verdeolivo.

Olvidar que hoy, esos amigos que se apuran a salvar, asesinaron a Iris Argentina, en un desalojo de tierras en Marcovia, y que sus negocios no se han detenido y se acumulan en sus cuentas bancarias a salvo de infecciones, que no cesan sus desalojos, persecuciones, agresiones y crímenes.

Entre la paradoja más terrible que es la de obedecer a quienes nos han condenado a la miseria y a estos virus que hoy nos matan, y cuidarnos y cuidar por responsabilidad y límite propio, algunas nos quedamos en casa, y tratamos de pensar más y mejor, mientras nos lavamos las manos como si nos hubiera tocado el COVID 19 hondureño, llamado JOH.

Intentamos salir de la maraña del terror que con tanta dedicación fomentan y tratamos de soltar, por obligación, el apego a hermanos obreros, abuelas viejitas, padres desobedientes por convicción que tiene alas en vez de grilletes. Tratamos de pensar juntas porque otra vez nos va la vida en ello y esa conciencia común también nos ha crecido en poco tiempo.

La incertidumbre ya estaba antes, las que conocemos los hospitales públicos sabemos que son morideros, pero ahora está la certeza de la enorme cantidad de males sumados que traerá la pérdida, el hambre, la escasez, la violencia y peor aún, el robusto patriarcado policial que tiene todo el permiso de nombrarnos con un número y ponernos presas ya no por subversivas sino por desautorizadas para andar en la calle en las cosas más triviales e importantes como buscar comida.

Un día tendremos que enfrentar que muchas y muchos nos contagiaremos, y que como con el cáncer del cual no se salva casi nadie, o con el dengue que no ha dejado de estar en todas partes vamos a perder afectos y gente que respetamos,

de esta manera atroz con que mata el sistema patriarcal. Y saber que nosotras mismas podríamos perder la vida, lo cual siendo hondureñas es un hecho con el que hemos crecido, con esa muerte no por el natural rumbo de la vida sino por la criminalidad que nos la arrebató.

Pese a todas las aflicciones con que nos condenan a cada rato por cadena nacional, no podemos dejar de mirar el avance de la narcodictadura y sus estrategias de poder, de corrupción y mendacidad internacional, no nos permitimos olvidar sus negocios sucios y su histórica responsabilidad en lo que hoy no es castigo de dios alguno sino la hechura bien terminada de un sistema asesino y cruel. El de ellos.

Que estemos encerradas no quiere decir que hemos claudicado. Y como del mismo palo viene la cuña, también nos queda atesorar la huella de las más sabias gentes de nuestros territorios rebeldes, prepararnos juntas para enfrentar el contagio, no abandonar a nadie como en una foto espantosa de Guayaquil, dar de comer a todas las personas que podamos, tomarnos los tés y comidas que nos criaron, cuidar a la gente mayor, sembrar para comer, volver a pensar juntas y abrazarnos muy fuerte para sabernos vivas como nos queremos.

*Melissa Cardoza Abril del 2020,  
49 meses sin Berta.*

## desde Brasil

O BRASIL ÚLTIMAMENTE TEM PASSADO POR UMA situação que conhecemos a modo geral como Estado de Sítio. O mundo apresenta uma tendência crescente de polarização com as mais variadas expressões de ressurgimento de extrema-direita. Essas manifestações dificilmente são explicadas com os paradigmas de esquerda e direita até então consolidadas no século XX. Observa-se uma composição de elementos que se consideravam superados historicamente e contrários a toda lógica da teoria política e econômica. Quem diria que um neofascismo pudesse emergir de modo oportunista diante de uma descrença geral das instituições republicanas e da democracia representativa burguesa? Espera-se que essa justa descrença leve a um movimento popular massivo que resulte na reivindicação da consolidação de direitos humanos e sociais, é uma oportunidade de avanço na conquista de direitos e na superação de todo tipo de desigualdade. Mas essas manifestações foram fortemente atacadas e silenciadas por uma esquerda governista temerosa diante dessa inédita emergência de extrema-direita, prestes a sofrer o golpe parlamentar que sofreu o governo de Dilma Roussef. O voto de Bolsonaro no processo de impeachment enquanto ainda era deputado foi dedicado ao Coronel Ustra, que torturou Dilma durante a Ditadura. Como imaginar que isso poderia desenvolver-se a partir de um planejamento que previu uma recuada, dissolução e minimização das instituições do poder público, e não o contrário? O fascismo no século XX pregoava uma extrema direita com características totalitárias e/ou autoritárias em que o aparato do Estado deveria ser uma ampla e forte máquina sob o controle total de uma figura central de autoridade.

Antes da eleição do energúmeno do Bolsonaro, figura mediocre que muitos acreditamos que jamais poderia eleger-se, podia observar-se no Brasil um ambiente social semelhante em alguns

aspectos àquele vivenciado pela Alemanha antes da segunda guerra. Um populismo fanático crescente, e uma grande esperança por grande parte dos Brasileiros de que esse sujeito pudesse representar algum tipo de mudança. Mas muitos não viram o que já estava se posicionando, um plano tosco de algum plano mal formado de um tipo de neofascismo neoliberal, que apostou muitas das suas fichas no descontrole e no desenrolar de uma postura permissiva diante de um aumento nos crimes cometidos pelos seguidores do atual presidente. A sombra mais nefasta dos brasileiros viu-se espelhada nesse sujeito, deixando perplexos todos aqueles que acreditavam no mito do brasileiro cordial e no de um Brasil que seria uma vanguarda latinoamericana do progressismo. O deputado, que nunca aprovou um projeto de lei durante seus 27 anos de mandato, dedicava-se a assediar e agredir os parlamentares que trabalhavam para aprovar projetos de lei que defendessem as minorias, entre elas as mulheres, @s indígenas, @s negr@s, @s LGBTQ+, os ambientalistas. É um inimigo da esquerda de modo geral. Usando um discurso falacioso de anticorrupção, entrou na fila daqueles que ecoavam e multiplicavam nas redes sociais todo tipo de discurso de ódio contra tudo e todos que não fosse a antiquada figura do homem branco, heteronormativo, rico (ou iludido na falsa possibilidade de enriquecimento dentro do capitalismo) e hegemônico. Em suas entrevistas pode-se ver destemperadas manifestações a favor de algum tosco retorno da ditadura militar, constantes agressões verbais a todas minorias que despreza, em sua convivência, nos seus pronunciamentos oficiais e nas redes sociais.

Defende o retorno da ditadura militar ao país, mas quando é questionado pelas mais variadas figuras públicas e instituições, volta atrás e se exime do que disse. Conseguiu eleger-se, fugindo dos debates com os outros candidatos, já que, mesmo sendo um tipo de psicopata narcisista e



perverso, a diferença de muitos deles, não é muito inteligente. Por mais antiquado que fosse, conseguiu construir sua imagem como algo relativo ao novo na política. Condenou os acusados pela lavajato, mas depois se aliou a eles para compôr suas alianças.

Não que a democracia representativa e burguesa seja lá um modelo ideal nem que o Estado que temos seja lá muito democrático. Mas o propósito do Bolsonaro sempre tem sido acabar com ela, com a constituição, e com uma série de direitos humanos e sociais conquistados após a luta centenária de movimentos sociais e populares. O setor mais atacado por ele é o indígena, ao afirmar e cumprir sua promessa de não demarcar sequer “um cm a mais de Terra Indígena”. Desde o início de seu mandato dedicou-se a fortalecer o Ministério de Defesa e a desmontar todas as outras instituições do estado dedicadas a oferecer serviços essenciais relacionados aos direitos humanos e sociais da população mais necessitada. Outro campo muito atacado foi o ambientalista, já que seu plano é deixar com que todas as reservas ecológicas, indígenas, quilombolas, extrativistas, seringueiras sejam invadidas pelos seus parceiros do agronegócio, garimpeiros, empreendimentos industriais privados e toda sorte de projetos de infraestrutura, sem ter que respeitar os direitos sociais e territoriais da sociobiodiversidade, nem o modo de vida de populações que vivem na floresta sem destruí-la.

O seu filho Flavio Bolsonaro, habituado às rachadinhas, está envolvido num esquema de corrupção que financia com dinheiro público a construção ilegal de prédios nas favelas. Um dos membros dessa milícia é um dos maiores suspeitos do assassinato da deputada do Psol Marielle Franco e do Anderson Silva. As tentativas do Bolsonaro de interferir nas investigações da PF a esse respeito fez com que o oportunista Ministro da Justiça se demitisse, para pousar de bom

moço e angariar capital político para quem sabe as próximas eleições presidenciais. Esse evento relaciona-se com a recente perda de legitimidade do Bolsonaro, devido a sua postura diante da crise do Corona Virus Covid-19.

Enquanto os demais países intensificaram suas medidas de controle, Bolsonaro nega a existência da doença, esconde os resultados dos seus exames que possivelmente deram positivo (pode ter sido contagiado junto com uma comitiva de 22 pessoas que fizeram visita diplomática aos Estados Unidos) e sai às ruas para abraçar manifestantes favoráveis ao retorno da Ditadura Militar e contrários à qualquer medida de quarentena devido a priorizarem o desenvolvimento econômico. O Governo Federal fez uma campanha publicitária com o slogan O Brasil não pode parar, mas depois de inúmeros questionamentos, escondeu a campanha e negou a sua existência. Antes da pandemia se instalar e ganhar notoriedade no Brasil, o Bolsonaro estava brigando com representantes do Congresso e do STF, porque queria decidir sozinho todo o planejamento dos gastos do ano para todos os órgãos públicos durante o presente ano. No dia 15 de maio haveria uma marcha convocada por apoiadores do presidente, solicitando o fechamento do congresso e do STF, um novo AI-5, o que teria sido uma tentativa criar uma situação para facilitar um golpe, não há outro lugar do mundo onde seja visto algo assim. Durante sua trajetória é claro sua intenção de abolir a maior parte das instituições que prestam serviços públicos essenciais à população. Enquanto isso, vai cercando seu gabinete e seus ministérios com figuras das forças armadas de sinistra trajetória e em muitos dos casos pouca capacidade de gestão. No 1 de Maio os trabalhadores não receberam nenhum recado (não foi tão astuto como fora Hitler), porque o presidente esteve reunido com o Major Curió, coronel reformado responsável pelo assassinato de mais de 40 militantes da guerril-

ha do Araguaia. O presidente está se cercando de seus grupos de apoio, militarizando o Estado e fomentando conflitos no campo que deixam as pessoas vulneráveis com o fim de grilar terras, privatizar riquezas e empoderar as milícias com as que convive.

Se o presidente não conseguir consolidar seu golpe durante a pandemia, não faltarão aqueles que tentem fazer outro golpe para proteger ao Brasil do presidente, ou pelo menos achar formas de isolar e neutralizar o seu poder, reforçando o protagonismo do legislativo. E a sociedade Brasileira, cogitará a possibilidade de aprender e colocar em prática outras formas de autogestão e au-

toorganização para não estar sempre na espera de salvadores da pátria?

Sabemos pelos números que o Brasil será o próximo epicentro é um dos mais dramáticos da pandemia até então. Mas também estamos no meio de uma crise política, institucional, territorial, de direitos humanos e uma série de conflitos causados pelo presidente. Não sabemos de tudo isso o que será pior.

*Su mercé*



# BRASIL E SEU ESTRANHO MILITARISMO DE GABINETE NA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS

ASSIM COMO A ESPANHA COLONIZADORA, diversos países da América Latina adotaram o militarismo como estratégia de combate à pandemia de COVID-19 através do uso da força para o controle social, com a presença maciça do exército nas ruas.

O Brasil, um país que ama seus militares, poderia ter seguido o mesmo caminho. Nosso último governo de esquerda não tardou a botar o exército na rua para conter protestos populares, inclusive durante a última Copa do Mundo masculina de futebol (antes da derrota por 7 a 1 para o time da Alemanha, que fez o Brasil deixar de ser “o país do futebol”). Mesmo assim, as Forças Armadas seguiram ocupando o primeiro lugar como instituição mais confiável da nação, conforme pesquisas de opinião de 2019. O atual governo, de extrema direita, escolhido democraticamente por mais da metade dos eleitores que puderam votar no final de 2018, tem seu gabinete formado quase totalmente por militares. O último Ministro da Saúde (em Maio de 2020) fez substituir os funcionários do quadro técnico do Ministério também por militares.

Todavia, quem estiver esperando encontrar coturnos marchando e tanques de guerra rodando pelas cidades e campos brasileiros se surpreenderá com a ausência de tropas e de medidas restritivas da liberdade em território nacional durante a pandemia de COVID-19. Mas não se iluda: o Brasil não está a seguir os passos de seu colonizador Portugal que, apesar de ter adotado uma disciplina rigorosa durante a quarentena, não colocou o exército nas ruas, tomando uma interessante medida decolonial ao anistiar imigrantes ilegais para incluí-los no sistema de saúde nacional. O que ocorre no gigante país de língua portuguesa

americano é uma versão piorada da política dos Estados Unidos da América, para o azar de nossas vidas.

Chama atenção a insistência numa postura negacionista da pandemia por parte do governo federal (que controla as Forças Armadas). Mesmo após termos ultrapassado as 10 mil mortes oficiais por coronavírus (subnotificadas dado o descalço com o sistema público de saúde, de modo que o número real de mortes pode ser muito maior), aproximadamente 0,005% da população brasileira, o presidente continua tratando a COVID-19 como uma “gripezinha”, exigindo que as atividades econômicas se mantenham na “normalidade”, mas concedendo mais de um trilhão de reais aos bancos e garantindo à burguesia o direito de demitir sumariamente trabalhadores durante a pandemia. Às classes baixas, oferece uma pequena quantia de R\$600 (U\$100) por mês enquanto durar a pandemia, para um ou dois membros da mesma família, que penam em longas filas num dos bancos do governo, a Caixa Econômica Federal, ou quebram a cabeça através de aplicativos para telefones celulares on-line que nem sempre funcionam, tentando ter acesso ao benefício, muitas vezes sem sucesso. Quanto aos demais cuidados com nossas vidas, o presidente da república recusa as recomendações da Organização Mundial da Saúde, tendo entrado em choque com seu antigo Ministro da Saúde, demitido por defender políticas mais duras contra o coronavírus. Bolsonaro continua sendo apoiado pela junta militar de seu governo (apesar de comentaristas da esquerda bolivariana terem imaginado que esta junta lhe daria um golpe “branco”), mesmo depois do general que comanda o exército ter declarado que o

combate à atual pandemia “talvez seja a missão mais importante da nossa geração”. Após sugerir a “quarentena vertical”, o governo federal apenas recomendou o distanciamento social e quarentena para certos serviços não-essenciais, sem tomar qualquer medida impositiva.

Diante da escalada de mortes — a sexta maior do mundo em números absolutos — a grande maioria dos governos dos Estados (sendo o Brasil uma república federativa, assim como os EUA) tem se revoltado contra o governo central e proposto formas mais estritas de quarentena. Porém, curiosamente, metade da população segue concordando com as posições negacionistas centrais e boicotando as quarentenas locais, tomando pouquíssimos cuidados contra a contaminação. Além disso, grande parte do povo é obrigada a sair às ruas para trabalhar, ainda que acredite na letalidade da pandemia e, sem conseguir ampliar direitos trabalhistas (ao contrário do que ocorreu recentemente em diversos países do continente e do mundo), reclama por uma maior presença do aparelho repressivo do Estado! Diante de uma baixíssima mobilização social e dada a apatia dos sindicatos oficiais, muitas opiniões de esquerda esperam que o Brasil adote um estilo repressivo semelhante aos demais países da América Latina, de modo a obrigar as pessoas a obedecerem as recomendações que se recusam a seguir voluntariamente. Estranho paradoxo! O povo brasileiro mostra-se, ao mesmo tempo, um dos mais irresponsáveis e autoritários do mundo.

No Brasil, a COVID-19 toma abertamente uma feição de disputa política: é tratada menos como questão de saúde pública e mais como conflito de “narrativas” e “ideologias”. Seguindo o esquema dicotômico e paternalista que dividiu o Brasil entre duas maiorias - filhotes do Lula (Partido dos Trabalhadores) e filhotes do Bolsonaro (atualmente sem partido) -, há uma ala à esquerda que defende medidas estatais mais duras e uma à direita que defende uma posição ultra-liberal não-intervencionista. Esta, capitaneada pelo presidente da república, parte de uma teoria maniqueísta gestada na ditadura militar (1964-1985) que visa

extirpar o “comunismo” e, em sua “narrativa” contemporânea, o “marxismo cultural” e a “ideologia de gênero”. Nesse sentido, os partidários do presidente sem partido atacam tanto o financiamento à ciência e à educação, destruindo o incentivo à universidade pública, considerada um antro “comunista”, quanto a relação com países como a China, um dos mais importantes parceiros capitalistas de um Brasil desindustrializado e exportador de soja. Ao chamar o coronavírus de praga “comunista” chinesa (ignorando que sua difusão na América Latina partiu principalmente da Itália...), o governo perdeu tanto o apoio do capitalismo chinês enquanto fornecedor de tecnologia (incluindo tecnologia médica) quanto abalou as exportações de um dos principais setores de sua base, o agronegócio. Assim o governo vai perdendo aliados também à direita, tanto de governadores como o do Estado de São Paulo, um dos mais afetados pela pandemia, quanto de ex-membros do próprio governo, com a saída do Ministro da Justiça em Abril de 2020, principal responsável pela prisão de Lula (libertado no final de 2019). O racha da direita corta tanto a oligarquia fisiocrata tradicional quanto a elite ultra-liberal.

Esses três pontos — o negacionismo científico; a oposição à China; o conflito entre governos estaduais e governo federal — colocam a política brasileira atual em sintonia com seu grande modelo imperial, os Estados Unidos da América. Não por acaso: como mostrou o geógrafo pacifista Élisée Reclus (1830-1905), ao contrário do federalismo descentralizado preconizado pelo proletário autodidata Pierre Joseph-Proudhon (1809-1965), de quem Reclus foi seguidor, os federalismos centralizados dos EUA e do Brasil foram ambos concebidos pela aliança entre elites patriarcais brancas locais unindo forças na constituição de um governo central responsável pela guerra contra populações subalternizadas e racializadas, ameríndias, negras e pobres em geral. Situação semelhante à “guerra de raças” estudada pelo filósofo Michel Foucault (1926-1984), cuja reflexão influenciou o conceito de “necropolítica” do cientista político Achille Mbembe: se a biopolítica, segundo Foucault, é o governo da vida, a necropo-

lítica, segundo Mbembe, é a escolha entre quem vive e quem morre. Enquanto cientista social, gostaria de sugerir que a atual pandemia global parece ter abalado este estado de coisas que fazia dos EUA um império global e do Brasil um império regional baseados em federalismos centralizados, além de ter exposto universalmente uma ruptura entre a política e a vida.

Tanto a eleição de Trump nos Estados Unidos quanto a de Bolsonaro no Brasil apareceram como uma reação aos limites de governos mais à “esquerda” e um pouco menos patriarcais brancos, como o de Obama e o de Dilma Rousseff. Estes últimos, apesar de tudo, foram incapazes de romper com as elites e de promover uma inclusão plena das camadas subalternizadas. Todavia, Trump e Bolsonaro aparecem num momento em que os fundamentos epistemológicos que os levaram ao poder já não se sustentam: o racismo, a supremacia masculina e o determinismo sexual não encontram mais base científica. Mas sua decorrente negação da ciência acaba colocando em risco setores do próprio patriarcado branco que deveriam defender. Enquanto isso, a necropolítica já não dá conta de controlar o coronavírus, os pólos europeus da branquitude se veem severamente abalados por uma pandemia que se dissemina des-governada pelas Américas, não permitindo mais escolher tão facilmente quem vive e quem morre. Patriarcas brancos como o governador do Estado de Nova York ou o governador do Estado de São Paulo se veem não-representados pelo governo central de seus países. Por mais que as camadas mais periféricas, negras e imigrantes (e, no caso de Nova York, latino-americanas) sejam as mais afetadas pela pandemia, as classes médias, altas e mais brancas também são contaminadas. Se o governador de São Paulo podia dizer, para ser eleito, que a polícia militar (controlada pelo governo do Estado) devia atirar para matar (subentendidas as pessoas negras e periféricas como alvo preferencial), a mira da COVID-19 não pode ser tão bem calibrada: o vírus não é tão obediente quanto um eleitor ou um soldado. Ainda, o governo de São Paulo, apesar de ter tentado, acabou dissuadido de usar a polícia militar enquanto força de com-

bate à pandemia via controle social nas ruas dado o apoio de seus oficiais à posição não-intervencionista do presidente da república. Já em outros lugares, como o Rio de Janeiro, milícias paramilitares mafiosas alinhadas à opinião presidencial tentam impor o fim da quarentena.

Por outro lado, o capitalismo mostrou ter bases bastante materializáveis: a produção de mercadorias sólidas, marginalizada pela economia virtual e de serviços “líquidos” desenvolvida nos centros capitalistas originários euro-americanos, foi culturalmente apropriada pela China enquanto arma de guerra “híbrida” imperial. O abalo global causado pela pandemia do coronavírus veio apenas coroar um poder que “O País do Centro” já tinha. Pois tendo sido a China o pólo original de difusão da COVID-19 diz menos de uma suposta “arma biológica” do que do papel deste país no capitalismo global hoje: um centro difusor de mercadorias das quais os demais países dependem. Se o império está nos detalhes, como diria a antropóloga Catherine Lutz, o novo título da China nos jogos de poder globais talvez não signifique o fim do patriarcado branco — aliás, é tampouco o fim do patriarcado em si, já que a China não costuma se destacar pelo combate ao machismo. Todavia é um indício de que a política enquanto continuação da arte da guerra seja cada vez mais travada por meios indiretos, mas não menos autoritários, dadas as altas tecnologias de controle de informação populacional também exportadas pela China para o mundo. Entretanto, neste campo internacional o Brasil parece estar cada vez mais longe de retomar a posse de bola, feito seu time dependente de treinadores estrangeiros. E nossas vidas seguem sob risco extremo.

*Guilherme Falleiros*



desde Paraguay

# RESISTENCIAS AL MILITARISMO COLORADO

LA MILITARIZACIÓN DE PARAGUAY HA proseguido en base a la alianza que el gobierno del partido colorado (ANR, Asociación Nacional Republicana) mantiene históricamente con las fuerzas armadas y policiales. La represión descarada de los primeros momentos de la pandemia ha sido sustituida por una de mayor sutileza y focalizada. Los medios masivos forman parte del aparato represor, anulando cualquier crítica a la gestión gubernamental en cuanto a sanidad, solo reclamando alguna que otra corruptela muy descarada en el abastecimiento de insumos hospitalarios o sanitarios.

Las personas paraguayas que retornan del exterior son obligadas a internarse en regimientos militares (ahora denominados “albergues”) para hacer cuarentena, impidiéndoles ir a sus hogares o a los hogares de sus familias en Paraguay. Quienes tienen dinero están facultados hacer la cuarentena en hoteles, incluso en sus casas si tienen los contactos adecuados con las más altas autoridades. Los “albergues” militares han sido denunciados –por quienes han sido ingresados allí- como foco de contagio con la #covid19 puesto que allí no se mantienen los cuidados exigidos, tales como distanciamiento físico, aseo, higiene y supervisión médica ya que simplemente se les recluye allí sin ningún tipo de atención y ayuda sanitaria. Fue mediatizado la declaración de una persona que escapó de estos recintos y mientras era apresada por ello declaró a la prensa que volvería a escapar.

Las fronteras continúan cerradas, habiéndose incrementado la presencia militar en ella y realizando –en la larga frontera con Brasil- acciones

de bloqueo físico en lugares donde la frontera era abierta y basada en la mutua confianza, como en el límite entre las ciudades de Pedro Juan Caballero (Paraguay) y Ponta Pora (Brasil), que es simplemente un parque.

El Puente de la Amistad sobre el río Paraná entre Ciudad del Este (Paraguay) y Foz de Iguazú (Brasil) fue cerrado a la circulación y en él se retiene a la intemperie a cientos de paraguayas y paraguayos que intentan retornar. Algunos/as desesperados/as entran clandestinamente y son denunciados por vecinos y/o familiares, siendo encarcelados por la policía.

El particular fascismo paraguayo, militarista y autoritario, el coloradismo es también cultural y se desata en estos tiempos auspiciado por la comunicación gubernamental que culpa de la pandemia al “exterior”. En las cuentas oficiales se señala siempre cuántos contagios vienen de fuera. En redes sociales la cultura colorada se expresa en demandas de no dejar ingresar a los y las paraguayas que piden retornar desde el exterior, quienes solo desde Argentina suman unas 3500 personas.

Como en otros Estados latinoamericanos, la política económica del gobierno paraguayo hacia la pandemia protege a las grandes empresas (agroganaderas, sojeras, supermercadistas, telefónicas, bancarias, entre otras) y desprotege a los pequeños y medianos negocios, especialmente a los negocios informales que forman la mayor parte de la economía paraguaya, incluida la informalidad rural. Mientras las grandes empresas como las telefonías y los supermercados sacan gran ganancia como auxiliares del gobierno para

efectivizar los planes de contingencia: pequeñas transferencias monetarias a través de la telefonía celular con procedimientos engorrosos que podrían o no adjudicarse a las personas que demuestren haber sido afectadas por la pandemia. Las trabajadoras y trabajadores sin habilidades para la tecnología y los pequeños comercios, sobreviven sin ayudas específicas, sin aportes a la sobrevivencia, negados tanto los créditos como los aportes que desde el gobierno se podrían haber dado, esta cuarentena dejará un reguero de negocios pequeños en quiebra y a las familias que con ellos sustentaban su alimentación y esperanzas. Las mujeres que son madres están siendo forzadas a una mayor carga en el trabajo doméstico, ahora también como profesoras ya que las clases han sido suspendidas desde fines de marzo. Pero no solo los colegios han sido cerrados, también los jardines infantiles y las guarderías, esto sin ayudas de ningún tipo llevando a la quiebra a cientos de estos emprendimientos primordialmente de mujeres.

Contra el fascismo local, contra el hambre y la falta de ayudas, contra la militarización se levanta la solidaridad y el autocuidado y cuidado colectivo. Desde el inicio de las cuarentenas obligatorias han surgido ollas populares (ollas comunes) impulsadas y sostenidas principalmente por mujeres y otros esfuerzos de apoyo mutuo entre el campo y la ciudad en las zonas más populares. Así mismo es digno de destacar como una acción de autocuidado colectivo la persistencia de los gremios de la salud, de las organizaciones sociales para forzar el mantenimiento de la cuarentena ante la profunda desconfianza de la situación de la salud pública afectada por años de saqueos y

favorecimiento a la salud privada. Las supuestas buenas cifras que muestra el ministerio de salud paraguayo en esta pandemia se deben, y mucho, a esa presión social que exige medidas de cuidado económico que no son escuchadas por un gobierno entusiasta en proteger a los suyos y postergar al pueblo.

*Caracolito, grupo de afinidad antimili.  
Asunción del Paraguay, mayo de 2020*



Desde Chile

# DE NUEVO LOS MILICOS EN LAS CALLES

A LOS POCOS DÍAS DEL COMIENZO DEL ESTALLIDO social aparecieron los milicos en las calles, convocados a reprimir las protestas que se desarrollaban como nunca antes por todo el país. Para quienes vivimos la dictadura, en mi caso como niño y adolescente, volver a verlos desplegados en el espacio público removi6 las memorias y los traumas de la dictadura militar. Pese al miedo y la incertidumbre, estas memorias y traumas no impidieron que la gente se mantuviera movilizad6, manifest6ndose y enfrent6ndose a la represi6n. Como pudimos ver a trav6s de los medios en muchas partes los milicos fueron increpados y en lo personal me toc6 estar fuera de estaciones de metro con decenas de personas que conminaban a los efectivos ah6 apostados a retirarse, todo lo cual permiti6 sobreponerse al miedo y a la violencia de Estado. Despu6s de un par de semanas, los milicos se devolvieron a sus cuarteles, dejando a los pacos a cargo de mantener e incluso aumentar la represi6n. Tal como nadie pens6 que pudiera pasar algo parecido a la crisis sanitaria del coronavirus, nadie pens6 que los milicos volvieran a las calles, aunque el gobierno hab6a estado presionando para usar a las fuerzas armadas para el resguardo de “infraestructura critica”, por cierto, sin aclarar nunca a qu6 se refer6an con estas infraestructuras. Dada la contingencia sanitaria actual, el gobierno no perdi6 la oportunidad de volver a sacarlos, no solamente bajo una l6gica securitaria sino tambi6n simb6lica, haciendo alarde del despliegue de boinas negras y diciendo que estaban “tirando toda la carne a la parrilla” en materia de control del orden p6blico, expresi6n muy poco afortunada cuando “la parrilla” fue uno de los m6todos de tortura recurrente en

dictadura. De este modo, se volvieron a instalar im6genes y simbolismos que trasgreden no solamente la memoria de quienes sufrieron la dictadura sino tambi6n la dignidad de una ciudadan6a movilizad6a que desde el 18 de octubre de 2019 ha luchado por sus derechos y contra una represi6n que ha dejado decenas de muertos y miles de heridos, torturados y presos pol6ticos. Los milicos de nuevo est6n en la calle, y lamentablemente las posibilidades de resistencia se han visto estrechadas de modo significativo por la pandemia, pero no cabe duda que la dignidad sigue latiendo con fuerza para volver a explotar contra este gobierno y el sistema neoliberal.

*Roberto Fern6ndez*



# \$HILE

Octubre  
Revolta  
Alegrías  
Cacerolas  
Milicos  
Toque de queda  
Presos  
Nueva Constitución  
Apruebo  
Coronavirus  
Alcohol gel  
Lavarse las manos  
Abandonar las calles  
Contagios  
Militarización  
Pandemia  
Aplanar la curva  
Curva curvada  
Asintomáticos  
Distanciamiento Social  
Emergencia sanitaria  
Cuarentena  
Masamadre  
Población de riesgo  
Militarización  
Prisión obligatoria  
Enemigo invisible  
Número de fallecidos  
Respiradores mecánicos  
Desempleo  
Largas colas  
Víctimas fatales  
Mal gobierno  
Zoom  
Milicos culiaos  
Ollas comunes  
Sobrevivir  
Después de  
Cuando termine  
Volveremos

*Marcela Paz*

# EN UN PAÍS NUBLADO (CON PANDEMIA O SIN PANDEMIA) NO SE PUEDEN BLANQUEAR LOS EJÉRCITOS

*¡Fuera, Piñera!*  
Facundo, 4 años.

Ya no importa si es de día o de noche, ya es realidad que los militares están fuera de sus cuarteles, en las calles del país. La pandemia ya se desbordó, y no nos referimos precisamente al covid 19. Desde el día en que en el territorio chileno las/os infectadas/os por Coronavirus bordearon la cifra de mil personas, el gobierno condiciona la cotidianidad a un estado, a primeras, de toque de queda; para luego establecer cuarentena en algunas ciudades del país y así controlar extensivamente a la población.

Este control militarizado no nace con el ejército en las calles, si no desde que brota el lenguaje belicista de la boca del presidente, enfatizándolo con el estallido social de octubre de 2019, y con el ministro de salud, quien ve al virus como un “enemigo” implacable. A través del lenguaje oficialista han vomitado conceptos que cubren a cualquier ciudadano que intenta informarse a través de los medios de comunicación: guerra, enemigo, daño, control, irresponsabilidad civil.

Lo cierto es que, si esto es una guerra, esta fue construida desde una resolución autoritaria y unidireccional venida desde arriba y del centro, para que se vean afectados las/os de abajo y de la periferia. No hay dos ejércitos, tan sólo hay uno en múltiples formas simbólicas, lingüísticas y físicas que amenaza a un sujeto/pueblo acorralado, y que tarde o temprano va a defenderse de alguna manera.

El coronavirus ha demostrado varias cosas, entre ellas que en Chile la vida no es lo primero, si no el capital. El valor del mercado y su dinamismo es lo que más se ha cuidado de forma irresponsable e inmoral, forzando su activación a costo de trabajadoras/es y del llamado al consumo como trampa de exterminio. Es así, como mágicamente el covid 19 desaparece cuando de consumir se trata, llamando desde el empresariado y políticos a concurrir a los malls y grandes tiendas a gastar, a mover la economía del país. Hacer fila para comprar es permitido y bien visto por las autoridades. Exponer las vidas pareciera ser un acto heroico por amor a la patria. Y es que patria y mercado son cuñas asociadas e inseparables.

Lo complejo de la asociación política-económica es que antagoniza con la asociación social-biológica. En otras palabras, la disociación del ejercicio del poder direccionada por las necesidades neoliberales, se contraponen con la organización social viva y amenazada por el agente pandémico ya conocido. La gente está contagiándose, así es, por responsabilidad casi total de un gobierno que elabora planes que blindan a la clase empresarial y desnuda a la clase trabajadora.

Hay un antecedente que no desconoce el gobierno. Desde que octubre se tiñó de protesta social, no somos las/os mismas/os. Hay una mezcla de fuerzas y sensaciones, como la rabia, descontento, miedo, amor y (ahora más que nunca) hambre; que movilizaron a todo un país. Esa fuerza nace de la población, de los sectores que no tienen nada que perder porque ya se les ha quitado

todo. El miedo al sujeto rabioso, al lumpen, como dirían ellos, los obliga a militarizar y neutralizar las poblaciones y sectores populares, con tal de ganar tiempo y hacer perder espacio de acción al sujeto periférico. Hay gente pensante y movilizada. Por eso es necesaria la demostración de soberanía institucional a partir de intervenir los espacios públicos y civiles con militares como acto de fuerza de un macho alfa por sobre el resto de una manada moribunda.

El hostigamiento militar y policial a las poblaciones emblemáticas, por ejemplo, responde al temor que tiene la clase alta de perder lo que han obtenido saqueando recursos y cuerpos trabajadores. Es ese temor con el que arman las calles con presencia militar, quienes no son más que cuerpos inconscientes y desclasados que se aproximan a cualquier civil con la estampa engrandecida y exaltados, proponiendo dos alternativas, la razón o la fuerza, ambas vistas desde la supuesta praxis que ellos son necesarios.

Como salidos de dibujos animados o de película de acción gringa, saltan los camiones color mierda para jugar a la guerra, para corretear a la gente, para torturar simbólicamente y físicamente a personas, a tal extremo de realizar prácticas del tiempo dictatorial, como dejar a detenidos abandonados en el desierto por no cumplir con los mandatos laicos, pero divinos, al fin y al cabo.

Cualquier tipo de manifestación que presente la realidad, que grite por hambre o por las injusticias de este gobierno (y de cualquiera) es legítima reprimirla, para dejar constancia que en este país mandan ellos y el resto acata, aunque lo estén haciendo mal. Pues sí. Lo hacen mal y lo seguirán haciendo, ya que las políticas sociales están construidas en terrenos que prevalece el modelo neoliberal, por tanto, terreno infértil en materia social.

Lo que se ha priorizado históricamente en Chile, en estos tiempos de pandemia, se ha desmoronado de a poco y dejado la más clara fotografía de lo que vivimos constantemente en este país: colapso en los servicios de urgencia y hospitalarios, precarización laboral, corrupción po-

lítica, hipocresía democrática, militarización de la sociedad, entre otros vicios que enervan a la gente hasta fallecer, literalmente.

En un escenario así, la premisa de un “pueblo unido” se ve como una propuesta lógica, un bosquejo más o menos dibujado que se debiese repetir en toda ciudad, en todo espacio en que el Estado intente lavarse las manos con sangre. Lo complejo y deprimente es que no es así, pues entre el gobierno y la militarización como ocupación territorial y coacción hay una multitud de sujetos civiles que han naturalizado o normalizado la presencia militar o la opresión por parte del Estado. Amnésicos por la televisión e indiferentes ante el dolor, estos sujetos vociferan las glorias del ejército, el toque de queda y la presencia militar como feligreses del pastor, permitiendo así el paso ancho del verde olivo por las calles que deberían ser de las niñas y niños jugando a ser felices.

Al igual que con el virus covid 19, hay infectados sintomáticos y asintomáticos. Pasa lo mismo en un país con tanta desigualdad. Hay quienes la desigualdad los postra, esperando el devenir marcado por el pulso que diga el dinero y el gobierno de turno. Otras/os no tienen síntomas, más no es porque no estemos infectados, solo que la infección la resistimos a través de acciones que se nos ocurren que son los antídotos posibles.

Uno de esos antídotos es el antimilitarismo. Estamos viviendo momentos radicales, de transformación social históricas. Es muy probable que lo que ocurra en estos años sea analizado y descrito en un futuro como un cambio de época, un cambio de las mentalidades. Somos optimistas, creemos que es posible que ocurra, siempre y cuando posicionemos radicalmente nuestra mentalidad, nuestro lenguaje y nuestras acciones, orientadas en la libertad de todas y todos.

Las medias tintas ya no son treguas, hoy no sirven. Desmilitarizar no puede seguir siendo reformular la institución castrense o civilizar la milicia. El camino debe estar más cerca de antimilitarizar, no permitir en las esquinas sujetos armados, no permitir el acuartelamiento de los jóvenes como una oportunidad de surgir; no per-

mitir que justifiquen la presencia de esos malos espíritus diciendo que es ayuda humanitaria. El blanqueamiento del militar, con sus sonrisas de buenas personas ante la ciudadanía, es tan sólo una careta que se triza cada vez que nos recordamos cuál es su verdadera función en el mundo: matar, matar y matar.

*Dan Contreras*

*21 de mayo de 2020, desde un Chile que lleva  
más de cincuenta mil infectados.*



desde Costa Rica

# COVID-19 Y LA EPIDEMIA DE LA MILITARIZACIÓN EN COSTA RICA

COSTA RICA, A NIVEL CONSTITUCIONAL, eliminó su ejército en 1949 tras el fin de la última guerra civil. Sin embargo, la formación militar no ha cesado después de siete décadas de aquel simbólico acto en lo que sería el último cuartel militar del país, hoy Museo Nacional de Costa Rica. Hasta la fecha, se siguen enviando policías a las principales academias militares del continente e Israel para entrenarse con WHINSEC (Escuela de las Américas), Carabineros de Chile, policía de Colombia y Linces de Panamá, además de la Mossad, aunque a la opinión pública a eso se le llame “formación civilista” de la policía, lo cierto es que dista mucho de ese ilusorio concepto de civilista.

Antes de la actual crisis sanitaria, la criminalización de la protesta social, su represión y su judicialización venía a pasos de gigante después de la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana en 2007. Después de este duro golpe para el movimiento social costarricense, se fue mermando la fuerza del movimiento estudiantil, muy activo durante este proceso y anteriores y, por supuesto, el resto de las organizaciones, principalmente sindicales reformistas, que también han venido en franco detrimento con las políticas de flexibilización laboral implementadas en contra del sector público. El zarpazo final lo daría la aprobación del plan fiscal en 2018.

Durante esos diez años que van desde 2007 al 2018, Costa Rica experimentó un acelerado proceso de militarización policial y de criminalización social sin precedentes, lo cual puede relacionarse con la crisis económica global de 2008 y la

agudización de una crisis también económica a nivel nacional producto de un déficit fiscal creciente (al cierre de este año será superior al 8% del PIB), cosa que el plan fiscal aprobado no logró mejorar, tan solo sirvió para seguir endeudando al país (solo para 2020 se prevén créditos de los organismos financieros internacionales por un monto superior a los \$3000 millones). Por lo tanto, en estos últimos doce años, los mermados sectores sociales han salido constantemente a las calles, recibiendo golpes certeros por parte del Estado para debilitarlos cada vez más, lo que ha implicado derrota tras derrota en las diferentes luchas que se han presentado, actuando la policía cada vez con más violencia y los tribunales con judicializaciones más severas.

Ante este panorama, ya de por sí complejo a nivel económico, político y social, se le suma la crisis sanitaria de Covid-19 que viene a profundizar estos indicadores. En estos meses de confinamiento, ha quedado demostrada la debilidad del sistema capitalista y la necesidad del Estado de salvarlo nuevamente. Las cámaras empresariales han recorrido los pasillos de las oficinas del presidente y diputados para la aprobación de un combo de leyes que les permitieran tirar sobre los hombros de la clase trabajadora los efectos de esta crisis, al tiempo que el Estado se prepara para futuros escenarios mediatos e inmediatos de estallido social, debido a la presión que la pandemia está teniendo sobre la economía familiar.

Estos escenarios de conflicto se están entrenando por medio de la actual crisis, imponiendo medidas de facto (el decreto de emergencia nacio-

nal, al tratarse de un hecho de fuerza mayor, le da poderes extraordinarios, por vía constitucional, al presidente de la república) entre el gobierno y la complicidad de todos los diputados de la Asamblea Legislativa. Esto ha llevado a un control excesivo de las fuerzas policiales en las calles, restringiendo las libertades individuales, tales como la libertad de tránsito, uso de armas de fuego de forma arbitraria o el ya acostumbrado autoritarismo con el que se dirigen a las personas. De esta forma, así como con la implementación de medidas legales de facto, el Estado se prepara para eventuales estallidos populares cuando levantarse de la raquítica situación económica correspondiente.

Este tipo de escenarios están fortaleciendo los aparatos represivos del Estado, es cuestión de tiempo para que Costa Rica se alinee a los crecientes gobiernos autoritarios regionales. Y este contexto, en general, al provocar un fallo en el sistema económico, provocará un renacer de los fascismos ya no solo en Europa, donde recobrarán el ímpetu que ya traían en la última década, sino que se expandirá en todo el globo. Desde abajo, eso sí, también esta situación puede y debe servir de tubo de ensayo para nuevas formas de organización, especialmente las libertarias, al demostrarse las falencias del capitalismo, aunque tocará enfrentarse a un Leviatán con nuevos bríos y con el apoyo de un buen número de la población tras el manejo de la pandemia, al menos en Costa Rica.

*José Solano*

*Desde el estado llamado Costa Rica*

Desde México

# LA PANDEMIA DE LA MILITARIZACIÓN EN LA REGIÓN MEXICANA

EN LA REGIÓN MEXICANA HA VENIDO DÁNDOSE UN avance de la militarización, que podemos rastrear, por lo menos, en sus etapas contemporáneas, hasta la década de los 90s. Éstas políticas han sido impulsadas lo mismo por los gobiernos del PRI<sup>1</sup>, como del PAN<sup>2</sup> y ahora con el gobierno de MORENA<sup>3</sup>, que se presenta como de “izquierda”, “progresista” y “antineoliberal”, no es la excepción, por más que intenta presentarse como “diferentes” a los anteriores gobiernos y partidos.

En la década de los 90s vimos avanzar la militarización, especialmente en las regiones indígenas, implementando estrategias de contrainsurgencia en contra de organizaciones y

1.- Partido Revolucionario Institucional, mantuvo el poder político desde que concluyeron las luchas revolucionarias, primero como el Partido Nacional Revolucionario, que se transformó en el Partido de la Revolución Mexicana, y finalmente en el Partido Revolucionario Institucional que gobernó hasta el año 2000 cuando perdió por primera vez el gobierno federal.

2.- El Partido Acción Nacional es un partido de influencia fascista, fundado por organismos católicos influenciados fuertemente por el modelo de Francisco Franco en la región española. En él se aglutinan grupos de extrema derecha, fundamentalistas católicos, núcleos empresariales. En el año 2000 llegó al gobierno federal encabezado por Vicente Fox, y siguió gobernando entre el 2006 y el 2012 con Felipe Calderón.

3.- El Movimiento de Regeneración Nacional, es el actual partido fundado por Andrés Manuel López Obrador, fundado cuando éste se separó del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el que participó desde que se salió del PRI.

comunidades campesinas e indígenas, así como en contra de las diferentes organizaciones guerrilleras, para golpear los procesos organizativos y de resistencia que hacían frente a las políticas gubernamentales. Muchas veces este avance militarista se ocultaba mediáticamente, y otras se presentaban como “necesario para estabilizar a la región frente a grupos del narcotráfico”.

Esta, digamos, “primera” ola de militarización, tenía por objetivo sentar las bases para erradicar o debilitar fuertemente a las diferentes organizaciones sociales y guerrilleras, y permitir que las Fuerzas Armadas instauraran su control en los territorios campesinos e indígenas, ricos elementos naturales ambicionados por el capital nacional y transnacional. Esta estrategia se mantuvo hasta iniciado el siglo XXI y durante su primera década, con momentos de avance dispares, según en la región de la que hablemos, siempre encontrando una importante oposición social entre las poblaciones, tanto en el campo como en la ciudad.

Durante los gobiernos del PAN, entre el 2000 y el 2012, se comenzó a implementar una estrategia mucho más agresiva y violenta, que se materializó durante el gobierno de Felipe Calderón, con su supuesta “guerra contra el narcotráfico”, que es en toda forma una verdadera guerra en contra de la población, implementada de forma masiva, primero en las regiones del norte y que se fue extendiendo hacia las diferentes regiones del país. Bajo el argumento de combatir al narcotrá-



fico, los gobiernos del PAN y del PRI, legitimaron la irrupción brutal de los cuerpos militares en la vida social, lo que ha generado una masacre social en la que se estiman cientos de miles de personas desaparecidas, asesinadas, torturadas, encarceladas, secuestradas, tanto por los grupos del crimen organizado como por parte de las Fuerzas Armadas. Éstas últimas fueron extendiendo su presencia en las calles, tomando en sus manos funciones policíacas, implantando su control mediante un terrorismo abierto en contra de la población y que en ningún momento implicó un frenar a los grupos del narcotráfico.

El actual gobierno, en manos de MORENA y encabezado por Andrés Manuel López Obrador, llegó al poder a partir de una mezcla de genuinas esperanzas populares de cambiar la situación, pero sobre todo por una serie de acuerdos con los principales grupos de poder, tanto económicos, como políticos y militares. Su triunfo permitiría la mediatización del concono social que venía creciendo durante los últimos gobiernos al presentarse como un triunfo de “izquierda”, en el que pronto comenzaron a aparecer en puestos claves diferentes personajes ligados a las estructuras del PRI, de los grupos empresariales y a las grandes cúpulas militares.

Hasta ese momento la militarización era de hecho, las fuerzas armadas imponían su control, pero no contaban aún con un marco jurídico que les abriera las puertas para actuar con toda la certeza de quedar impunes, en cierta medida, porque importantes sectores sociales insistían en oponerse a ésta y señalar los peligros que esto implicaría, política y socialmente.

Durante la larga campaña política de López Obrador, que comenzó en el 2006 cuando compitió por primera vez por la presidencia de la república, señalaba insistentemente su supuesta oposición a la militarización, anunciando que, al llegar al gobierno, haría volver a las fuerzas armadas a sus cuarteles. Sin embargo, cómo era de esperarse, al momento de tomar posesión comenzó a enviar mensajes que evidenciaban su alianza con las altas cúpulas militares y sus planes de

abrirles las puertas de par en par para actuar con impunidad en todo ámbito de la vida social y dotarlas de un marco constitucional para ello.

El actual gobierno ha invertido mucho para construir una imagen en la que se presenta a las Fuerzas Armadas como “amigos del pueblo”; cómo “la única institución sin corrupción”, como quienes “siempre han salvado al pueblo”, para legitimar sus políticas militaristas, entre las que destacan los millonarios presupuestos asignados, las prebendas políticas y económicas y un marco jurídico constitucional para amparar sus acciones. El año pasado (2019) fundó la Guardia Nacional, un organismo militar diseñado para actuar en todos los ámbitos de la vida civil, dotado con todas las certezas constitucionales necesarias para no depender ni dar cuentas a nadie de sus acciones, lo que implica abrirle de par en par las puertas a la impunidad. Junto a esto, MORENA, desde el gobierno federal y desde las cámaras legislativas, donde tienen mayoría, aprobaron reformas constitucionales que dotan a las Fuerzas Armadas de la capacidad irrestricta para actuar.

Estas reformas venían siendo impulsadas desde los gobiernos de Felipe Calderón (PAN) y de Enrique Peña Nieto (PRI), pero no habían podido implementarlas, y es justamente el gobierno de López Obrador (MORENA) quien logró aprobarlas prácticamente sin oposición política, y desafortunadamente, también con poca oposición social, debido a la confianza adquirida por el presidente. Además, a las Fuerzas Armadas, se les ha otorgado diferentes potestades en la construcción de megaproyectos económicos, y para participar en la construcción de bienes inmuebles para su venta privada, con el fin de que puedan generar recursos propios.

Para este año 2020 el gobierno de López Obrador aprobó un millonario presupuesto para Seguridad Nacional y Seguridad Pública, que asciende a más de 200 mil millones de pesos que se distribuyen entre la Secretaría de Defensa Nacional, la de Marina y la de Seguridad y Protección Ciudadana, de la que forman parte la recién creada Guardia Nacional y la Policía Federal, ambos,

cuerpos militarizados, mientras que otros sectores públicos se han visto afectados con importantes recortes presupuestales, que se argumentan en la tan neoliberal “austeridad republicana”.

En todo el mundo la situación relacionada con la epidemia del COVID 19 ha sido aprovechada por los gobiernos para implementar políticas de corte proto-fascista y militaristas. Y en la región mexicana no es la excepción.

En medio de la emergencia el gobierno de MORENA asignó presupuestos de emergencia a las diferentes secretarías de las Fuerzas Armadas (SEDENA, SEMAR y SSPC), de alrededor de 4,500 millones de pesos extras, justificando que serían estas instancias las que tendrían en sus manos la acción frente a la epidemia. Sin embargo, a mediados de mayo, en los momentos en que México está llegando a, hasta el momento, los puntos más altos en contagios y muertes, la atención de la población está siendo llevada a cabo por el abandonado sistema de salud pública, y la acción de las fuerzas armadas ha sido la inactividad en este sentido, a pesar de haber sido dotada de millonarios presupuestos de emergencia.

Además de esto, el gobierno de MORENA ha aprovechado la situación para terminar de aprobar los marcos constitucionales que legalizan completamente la militarización de la vida social, mientras que la atención mediática y social se concentra en la emergencia que se está viviendo con la epidemia.

Esto se ha dado en plena emergencia que va más allá de la de salud pública. Por un lado, importantes sectores sociales están impedidos de mantener la cuarentena porque las empresas y fábricas se niegan a cesar la producción, para mantener sus índices de ganancias, poniendo en riesgo a las y los trabajadores. Por el otro lado, muchos sectores sociales que sobreviven del pequeño comercio y de la economía informal, están en una crisis económica al no poder trabajar y solventar sus necesidades básicas de sobrevivencia. Otros sectores que fueron enviados a cuarentena, en algunos casos, las empresas sólo durante

el primer mes les proporcionaron sus salarios, y en otros tajantemente fueron despedidos.

Las diferentes instituciones del sector salud han vivido un largo proceso de abandono y recortes presupuestales derivados de décadas de políticas neoliberales, que continúan y se han fortalecido durante este gobierno, haciendo que sea en todo sentido incapaz de enfrentar la emergencia y proporcionar la atención adecuada a la población.

Antes de la epidemia, no pocos hospitales públicos, en diferentes sentidos llegan a funcionar gracias a que el propio personal que trabaja en ellos, aporta de sus bolsillos los recursos para conseguir lo básico en materia de higiene y de seguridad personal, como material desinfectante, guantes, jabón, cubrebocas, batas hospitalarias, etc. Son las y los trabajadores de los hospitales quienes hacen funcionar en medida de sus posibilidades las unidades de salud.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria, ellas y ellos, personal de enfermería y médico, han hecho denuncias sobre las condiciones reales en que tienen que trabajar y atender a la población contagiada; los altos niveles de riesgo de contagio a los que están expuestos; las muertes que han tenido entre el personal médico; y el abandono gubernamental, señalando la realidad del sistema de salud y de la capacidad de enfrentar la epidemia, al contrario de lo que insiste el gobierno.

Aunado a esto, el gobierno presenta datos sobre la epidemia que no representan la realidad que se vive, sino que sólo pretenden presentarse a sí mismo como preparado y capaz de actuar y enfrentar la situación, mientras que los hospitales están sobresaturados y sin capacidad de atender a la población en situación de gravedad, lo cual agrava la crisis de salud que genera el COVID 19.

El gobierno en vez de actuar frente a la crisis de salud, económica y social, ha preferido ocultar la realidad y construir falacias mediáticas. Y ha aprovechado la situación para avanzar en las políticas de militarización de la vida social, aumentando los de por sí ya millonarios presump-

tos dados a las Fuerzas Armadas, y proporcionándoles un marco jurídico de puertas abiertas para actuar en completa impunidad.

Mientras tanto la población está abandonada, en no pocas ocasiones a su suerte, responsabilizándose de sus propias posibilidades de sobrevivir a la crisis económica y a la enfermedad; las y los trabajadores del sector salud están abandonados a su suerte para protegerse a sí mismos y poder atender de la población que alcanza un lugar en los hospitales, una cama o un respirador; la población que alcanza un espacio en éstos, sobrevive en gran medida gracias al trabajo de ellos y ellas.

Las Fuerzas Armadas no dejan de ser dotadas de cada vez mayores garantías de impunidad aceptadas por la constitución; de millonarios presupuestos corrientes que superan en mucho al de educación o salud pública, que se incrementan con las partidas de emergencia que les han sido asignadas para realizar una tarea que no están realizando ni por error; de cada vez mayores facultades para intervenir en la vida social, sin ningún obstáculo jurídico ni político; fortaleciendo

la militarización y el poder de las cúpulas castrenses, que no dejan de desplegarse en las regiones en las que el actual gobierno implementara importantes megaproyectos económicos como el Tren Maya, el Corredor Trans-Istmico, y donde los grandes capitales nacionales y transnacionales tienen puestos sus garras para apoderarse de los recursos que necesitan explotar.

La amenaza militar, está ya en las calles desde hace décadas, ha desplegado su brutalidad sobre las poblaciones y mantenido su alianza con los grupos del crimen organizado, ha dejado un reguero de sangre, tortura, desapariciones forzadas, fabricación de culpables, asesinatos; y el actual gobierno, actúa en consonancia con los anteriores del PRI y del PAN, abriéndoles cada vez más la puerta para actuar con toda impunidad.

*Coyote*

*¡Ni militares, ni marinos, ni guardias  
nacionales, ni policías! ¡Ni en las calles,  
Ni en los cuarteles! ¡La lógica militar,  
sólo puede ser brutalidad y muerte!*

# MILITARIZACIÓN POR DECRETO EN MÉXICO

**Ante la crisis social, económica y política, y la movilización social que se avecina el gobierno de México avanza su política de militarización del país**

**La presidencia del país busca blindar sus ampliamente criticados proyectos neodesarrollistas y extractivistas**

PODEMOS REMONTAR LA ESTRATEGIA ACTUAL de militarización del país a su inicio ostensible por el ex presidente Felipe Calderón (Fecal) recién comenzado su gobierno durante 2006, con aquella declaración pública de “guerra contra el narco”. De este modo, las fuerzas militares se encargaron de las labores de seguridad pública y de persecución del delito durante todo ese periodo presidencial, mientras que se incrementaron las detenciones arbitrarias, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y casos de tortura, a manos de las fuerzas armadas. El siguiente mandatario presidencial, Enrique Peña Nieto (EPN), entre 2012 y 2018 sostuvo la militarización del país, sin embargo, a diferencia de su antecesor, quiso bajar el perfil mediático de dicha estrategia y con ello disminuir la percepción en la opinión pública sobre la violencia extrema disparada en los recientes años.

No obstante lo anterior, en el año 2016 desde el poder legislativo se impulsó un grupo de normas, conocida como “Ley de seguridad interior”, que buscaban legalizar la participación de las fuerzas armadas en la seguridad pública, que hasta entonces se encontraba fuera del ámbito de sus atribuciones constitucionales, la cual hizo efectiva su promulgación en 2017. La versión final de esta ley era por demás imprecisa en las tareas para las que estaba facultado el ejército y la marina, dando lugar a una amplia interpretación sobre las tareas que sí podía llevar a cabo el ejército. Fue hasta finales de 2018 (escasas dos semanas antes que el actual presidente tomara posesión de

su cargo), luego de casi dos años en que colectivos populares, comunidades indígenas y sectores de la academia se movilizaron intensamente a nivel nacional e internacional, que la máxima instancia judicial del país declaró la inconstitucionalidad de dicha ley de seguridad interior.

A finales de 2018 entró en funciones Andrés Manuel López Obrador (AMLO), cuyo gabinete de gobierno, a partir de ese momento, cada vez que alguna de sus decisiones es cuestionada por los efectos negativos sobre la autonomía y los derechos humanos (ddhh) de personas y colectividades no ha perdido oportunidad de apelar a su contundente victoria electoral y estimación popular, según los sondeos mediáticos. A este respecto, grupos de mujeres han señalado las más recientes declaraciones presidenciales en que se desdeña la violencia contra las mujeres; por su parte, grupos de periodistas mantienen acciones de resistencia en contra del uso de bots por parte de la agencia informativa del Estado mexicano para desprestigiar y atacar a quienes sean críticos con el gobierno; para citar otro ejemplo, las comunidades y grupos autonómicos, varios de ellos indígenas, continúan la resistencia de siglos en contra del despojo de sus territorios para proyectos extractivistas como la minería, la industria energética, la turística, entre otras.

En este contexto, el pasado 11 de mayo se publicó el acuerdo presidencial por el cual la Fuerza Armada permanente está facultada para participar con la Guardia Nacional (conformada a su vez

por el ejército, la marina y la casi extinta Policía Federal, esta última de carácter civil) en las labores de seguridad pública hasta marzo de 2024, es decir, nueve meses antes del término del actual mandato del presidente. Cabe destacar que dicho acuerdo estipula que será de manera extraordinaria, fiscalizada, regulada y complementaria, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su propia estructura, capacidad e implementación territorial, situaciones que no se ven próximas y es difícil de determinar cuándo sucederán. Así mismo se determinó que las tareas de seguridad pública se coordinaran entre una instancia civil y dos militares, sin que se especifique cómo será la toma de decisiones. De modo que, la militarización de facto acentuada por Fecal en 2006 y sostenida por EPN durante su mandato, con este nuevo gobierno vio realizado el marco legal para operar la seguridad pública del país.

Cabe destacar que dos de los proyectos de desarrollo económico y social insignes del actual gobierno son el “Tren maya” y el “Corredor transistimico”, localizados en los territorios del sur y sureste mexicanos y con gran relevancia geopolítica en la región de Norteamérica, cuyos graves efectos sociales, ambientales y económicos, además de violentar la autonomía de los pueblos, han sido denunciados incesantemente por comunidades indígenas y sociedad civil organizada. En un contexto mexicano caracterizado por la persecución, criminalización y asesinato de activistas ambientales y defensores de la tierra y el territorio, es importante señalar el uso de tipos penales contra quienes se opongan a la imposición de megaproyectos, aduciendo el interés público y estratégico de los recursos naturales y energéticos. Los proyectos antes mencionados no han cesado su actividad en las recientes semanas en que se ha declarado oficialmente la suspensión de actividades no esenciales en el país, aunado al marco legal por el cual la Guardia Nacional tiene facultades de investigación para la prevención de delitos, realizar detenciones, ejecutar órdenes de aprehensión, llevar a cabo operaciones encubiertas y labores de inteligencia. Asimismo, las fuerzas armadas están facultadas, a partir del recien-

te decreto presidencial, para llevar a cabo tareas de prevención del delito en zonas fronterizas y aduanas, al norte con Estados Unidos y al sur con el Triángulo norte de Centroamérica, conformado por Guatemala, Honduras y el Salvador (una de las regiones con mayor tránsito de personas en situación de movilidad en el mundo), esta última región también colindante con los estados mexicanos donde se busca implementar los dos proyectos mencionados con anterioridad.

Si bien es cierto que la militarización de México lleva años operando, el decreto promulgado por AMLO, además de legalizar la vigilancia, inspección, verificación, protección civil, entre otras labores, a manos de las fuerzas armadas, deja varios puntos sin especificar como la determinación de la subordinación de mandos, de manera cotidiana y en operativos, si los efectivos del ejército y la marina se van a subordinar a los mandos civiles, cómo se determinará cuáles son las situaciones extraordinarias, por mencionar sólo algunas. Este decreto abre la puerta para un Estado de máximo control, con un amplio margen de acción en contra de la movilización social del último año y de la que ya se avizora en contra de la desigualdad económica, política y social, así como de un modelo político y económico que depreda la vida digna y provoca la muerte de personas y territorios, que busca subvertir la crisis de la COVID19 que ha acentuado la precarización de la vida, mostrando con crudeza la vulnerabilidad y violencia contra la salud, el trabajo y la dignidad.

*Ramalc en México*



Desde Colombia

# CONTEXTO PANDEMIA MEDELLÍN

DESDE LA LECTURA ANTIMILITARISTA SE HA IDO transversalizando un poco sobre las situaciones que han pasado en la ciudad de Medellín, en este caso el uso del miedo para manejar esta situación. Desde el miedo al contagio como al propagador y eso no quiere decir que no se tenga en cuenta las recomendaciones médicas. Hay que tener en cuenta el uso del miedo para prevenir ataques no solo virales en términos de la propagación sino ataques de personas que no tienen acceso a alimentación debido a la precarización de la informalidad del trabajo que se ha ido afianzando cada vez más en la ciudad

Desde el lenguaje de la guerra, “la guerra contra el virus” pero desde también el aislémonos socialmente, aislémonos del otrx para prevenir del contagio y para no saber cuál es su situación y para no responder de una manera solidaria y colaborativa

Vemos como el militarismo ha ido activando esos mecanismos de respuesta ante esto, sumándole el control territorial que han venido haciendo desde grupos armados como tal. En este caso como la entrega de algunas ayudas por parte de la institucionalidad del Estado acompañado de la Policía y Ejército porque esta “la inseguridad del saqueo”. Además, en los barrios y algunas zonas de la ciudad de Medellín los grupos armados “ilegales” que hacen presencia en el territorio, participan en la entrega de las ayudas y amenazan a líderes de los barrios.

Es importante tener en cuenta que el antimilitarismo lo que buscamos es evidenciar que esas prácticas del militarismo y la militarización de los territorios; porque desde el antimilitarismo se proponen otras formas para entender este mo-

mento. Desde la posibilidad de entender las capacidades de cada cual, y de las capacidades comunitarias para activarlas y potencializarlas aún más pues porque ya venían activas, es lo que en los barrios han venido haciendo para poder subsistir y es a través de las redes y la solidaridad, con muchas dificultades y diferencias con la posibilidad de construir desde otra manera porque los barrios se han construido sin el Estado y en otras ocasiones contra el Estado

Los gastos militares en concordancia con los gastos médicos y gastos sociales y como se está haciendo a partir de la intervención del presupuesto de lo social si bien está pensado para la ayuda humanitaria para superar este momento no ha permitido que sea para cerrar esa brecha de inequidad social y lo que están haciendo es aumentar y precarizar la situación en los barrios desde una política de asistencialismo sostenido y no cambios profundos en las condiciones territoriales de mujeres, niñas, niños y hombres en los territorios

Hay que tener en cuenta que estos gastos se han invertido en reforzar la idea de seguridad y el gasto militar y de lo militar en término de la defensa del enemigo que nos han colocado en este caso es un virus. Este ha opacado otra de las situaciones políticas que se han dado en el país como en el mundo, claramente nos muestra que hay un reacomodo de intervenciones militares y de confrontaciones bélicas en este momento.

*Kolectivo Antimilitarista de Medellín*

# RESISTENCIAS Y MILITARIZACIÓN

EN TÉRMINOS GENERALES, EN COLOMBIA la reacción frente a la pandemia, hasta el momento, ha manejado la más clásica retórica nacionalista y militarista que se sustenta en una guerra contra un enemigo común y que despliega una respuesta de acción militar en los territorios.

Queremos abrir este reporte de la grave situación de militarización en contexto de pandemia señalando que las resistencias no paran, que las resistencias se regeneran. Consideramos necesario iniciar reportando que las resistencias no paran desde el confinamiento, reportar que los pueblos indígenas siguen conteniendo el avance del extractivismo a través de detener movidas legislativas que favorecían acciones extractivistas sin garantía de la consulta previa. Queremos iniciar diciendo que la solidaridad está creciendo en distintas formas que germinan desde la necesidad y la creatividad: en Bogotá fuimos testigos cómo se generan redes de solidaridad con el pueblo indígena Embera que vive en condiciones precarias en las ciudades.

En este tiempo de confinamiento se conmemoró el Día de la Objeción de Conciencia, ocasión por la cual se celebró por medio de un Festival Antimilitarista realizado el 15 y 16 de mayo de 2020 en el que participaron de diferentes organizaciones del país. Este Festival significó una unión significativa de muchas organizaciones para celebrar todas las luchas que se han dado alrededor del antimilitarismo, para celebrar la vida en medio de días de reportes de muertes. Hombres y mujeres juntas para gritar lo que hacemos por acabar con el militarismo en Colombia. De igual manera, el jueves 14 de mayo de 2020 se llevó a cabo una sesión de la Asamblea Medioambiental de Latinoamérica.

## Pandemia y militarización

El Estado de Excepción decretado el pasado 25 de marzo por el Gobierno de Colombia, ha implementado medidas muy cercanas a lo que sería un Estado de Sitio, otorgándole a las fuerzas armadas facultades preponderantes para resolver y contraatacar militarmente las afectaciones del Enemigo Público: Covid19; un microorganismo biológico, invisible pero mortal, el cual, bajo la lógica armamentista del Gobierno Colombiano, será derrotado a bala, literalmente.

Las medidas de mitigación en principio respondieron a un toque de queda sanitario, pero rápidamente se transformaron en un toque de queda militar. En el mes de abril, el Gobierno Nacional emitió un Decreto en el que señala que las medidas que adopten los gobiernos y entidades locales frente a la reacción, con respecto de la pandemia, deberán ser concertadas con el gobierno central y las fuerzas armadas. En esta misma línea, el Ministerio de Defensa dispuso un encuartelamiento de primer grado para todas las fuerzas. Las condiciones sociales de desigualdad y de hambre se han hecho visibles, incluso a ojos incautos, en los territorios en los que se observan trapos rojos, que son una triste convención para comunicar que esa persona, familia u hogar, no tiene alimentos básicos para sobrevivir.

La enfermedad del Covid19 está implicando un genocidio indígena. Un sistema de información gestionados por los mismos pueblos indígenas reporta que hasta el momento se registran 23 pueblos afectados, en los que el contagio asciende a 290 casos y 9 fallecidos. Aún falta confirmar 32 casos en seguimiento, y así mismo se registran 6 pueblos en observación, uno de ellos con 26 personas posiblemente infectadas. Dado que aumenta el riesgo de contagio a 324.301 familias, este



sistema de información alerta grave Riesgo de Extinción por fragilidad demográfica.

El pasado lunes 18 de mayo, Colombia llegó a los 16.295 casos de contagio y 592 personas fallecidas a causa del virus, una cifra estimada como la entrada al pico alto de contagios en el país; es importante aclarar que las cifras oficiales se distancian sustancialmente de la realidad de contagios, pues el incremento de resultados positivos es directamente proporcional al número de pruebas realizadas, las cuales han sido algo “escasas”, pues 47.500 pruebas son alarmantemente insuficientes para cubrir a 49 millones de personas. A la par de la progresiva cifra de contagios por Covid, se han develado incesantes brotes de xenofobia y ataques a las comunidades empobrecidas a través de la represión de protestas por falta de condiciones básicas y de garantía de derechos a través del desalojo de familias que ocupan territorios y no cuentan con habitaciones formales.

El miedo al enemigo público infundido como parte del Terror de Estado habitual, sumado a la aguda crisis económica por el detenimiento de la microeconomía, ha incubado la rabia y la indignación de las gentes, quienes prefieren salir a las calles, manifestarse y exponerse a morir por contagio que quedarse en casa y padecer paulatinamente de hambre. Colombia es un hervidero, al menos 19 defensores de derechos humanos y líderes sociales han sido asesinados en Colombia en lo que va de 2020 y están en verificación otras 34 posibles muertes de personas por razones asociadas a su activismo. Mientras la violencia no encuentra contención en la crisis sanitaria la insurgencia del ELN declaró cese al fuego unilateral y propone al gobierno reactivar diálogos a través de la delegación presente en La Habana.

A continuación, presentamos elementos que describen el contexto de militarización en el contexto de pandemia en Colombia para el mes de marzo, abril y mediados de mayo.

### **Represión a protestas en las ciudades**

En distintos lugares del territorio nacional se presentaron protestas para exigir condiciones de

garantía de condiciones mínimas de garantía de derechos. Las comunidades de sectores populares empobrecidos fueron reprimidas tras verse en la necesidad de salir de cacerolazo con trapos rojos a exigir en las calles condiciones mínimas de garantía de derechos. En Bogotá sorprendió la respuesta de la policía en sectores en los que se desplegó una la campaña “Somos uno, somos todos” con la cual buscaban, en sus propios términos, subir la moral de la ciudadanía con perifoneo con mensajes positivos y con clases de zumba. Pero no sorprendió que al mismo tiempo que la misma policía hiciera desalojos de viviendas “hechizas” en las que viven las familias en los sectores más empobrecidos, las imágenes son desgarradoras.

### **Fronteras cerradas y militarizadas**

Varios legisladores exigieron la militarización de las principales ciudades como parte de las medidas de cuarentena. Varios departamentos o regiones han tomado la decisión de cerrar sus fronteras y pasos a otros lugares al interior del país, soportando esta decisión con la presencia militar como agente de control. En el departamento de Boyacá se hizo muy clara la respuesta militarista ante la pandemia: las autoridades locales que pidieron al gobierno central la militarización de los territorios y el control de las fronteras departamentales. Este fue el caso de los importantes municipios de Tunja, capital departamental, Duitama y Sogamoso. Chía y Cajicá, municipios vecinos a Bogotá y en varios casos de paso transitorios para otras ciudades y regiones, han tomado la decisión conjunta de cerrar y militarizar sus territorios, con el fin de controlar el paso de personas que no habitan estas ciudades.

La reacción estatal militarista frente a la crisis sanitaria llevó el despliegue de estamentos militares en las fronteras para controlar el flujo del virus. A mediados del mes de mayo el gobierno anunció el cierre de la frontera amazónica con Brasil. Los medios de comunicación informaron ampliamente que, ante el fuerte avance del virus en el departamento del Amazonas, los territorios serían ocupados por las fuerzas militares: pronto

aterrizó un avión Hércules de la Fuerza Aérea a Leticia, capital departamental, con militares en mejores condiciones de protección que los profesionales de la salud de los hospitales de las principales ciudades.

A partir de este operativo militar el presidente Duque anunció “se ha tomado la decisión de militarizar con más presencia todos los puntos de frontera y ejercer el respectivo control para evitar que estén llegando casos importados de población flotante”.

La frontera del Pacífico norte en el departamento del Chocó, habitada ancestralmente por las comunidades indígenas Emberá, Wounaan y Guna Dule – Cuna -Tule, población en riesgo de exterminio debido a los niveles de pobreza multidimensional y a los brotes de malaria aún presentes en la región, han sido gravemente afectados en tiempos de pandemia, el incremento de la presencia militar en su territorio ancestral se ha incrementado para controlar el ingreso de turistas, migrantes y comerciantes provenientes de Costa Rica, Nicaragua, República Dominicana, Honduras, Haití, Jamaica. Esta situación controla el tránsito de gentes con fuerza excesiva, bajo la bandera del “control sanitario”, pero no ejerce ninguna medida sanitaria frente a la tripulación de las embarcaciones, fomentando el riesgo de contagio, incrementando las violencias dirigidas a población vulnerable y en riesgo de exterminio y agudizando el conflicto armado pre existente en la zona.

### **Migrantes y confinamiento**

Los migrantes han sido afectados sensiblemente en medio de la crisis. Frecuentemente han sido señalados como peligrosos y son frecuentes los desalojos de sus habitaciones por falta de pago de las rentas, falta de pagos que tienen lugar por efecto de la cuarentena, porque se han visto totalmente imposibilitados de generar ingresos con las precarias que disponen.

Muchas personas migrantes “incluso con bebés en brazos y sin alimentos” según la DW se han visto obligados a regresar caminando hasta Vene-

zuela, una vez más recogiendo sus pasos por las accidentadas montañas, por las precarias carreteras que ya habían recorrido en plan de salida y ahora de regreso. A pesar del cierre de la frontera representantes del gobierno colombiano gestiona la salida de migrantes a través de un corredor humanitario, el cual funciona de hecho porque los militares que custodian los campos de la frontera están permitiendo el paso de venezolanos de regreso a su país.

A finales de marzo una funcionaria distrital reportó que, en la zona suroriental, en las inmediaciones de la plaza de abastos de Bogotá, hubo actos de agresión entre migrantes venezolanxs con afrocolombianos. Las agresiones se dan en medio del inicio del cierre del comercio por la cuarentena obligatoria. La respuesta del gobierno colombiano fue militarizar la zona, ejército y policía antidisturbios hicieron presencia en el lugar.

Así mismo, en el barrio Santa Fe de Bogotá, lugar de concentración de habitación y trabajo de la comunidad trans en Bogotá y de alta concentración de migrantes venezolanos, las calles han sido militarizadas como respuesta al desacato de la medida de cuarentena por parte de habitantes que salen a las calles porque perdieron sus trabajos y porque deben activar su economía degeneración diaria de ingresos.

En la ciudad de Cali la policía y el ESMAD arremetieron violentamente el pasado 16 de mayo contra una comunidad sin techo asentada en el popular barrio Siloé de la Comuna 20. Esta comunidad que fue desalojada luego de estar un año ahí asentada debido a la por la grave falta de vivienda en todo el municipio y por el desplazamiento forzado que en Colombia no para. Estos desalojos son alarmantes en la medida que hay cientos de familias en el Jarillón del Río Cauca, en los sectores del centro de Cali, en las laderas y corregimientos.

Así mismo en Altos de la Estancia, un asentamiento de 350 familias en un sector empobrecido de Bogotá, muchas de ellas familias de desplazados por la violencia y migrantes, se ha desarrollado un operativo de desalojo que se han pro-

longado por varios desde mediados de mayo. Los desalojos violentos según denuncian habitantes, y de ninguna manera justificados en tiempo de cuarentena, son ordenados porque la zona es considerada de alto riesgo por remoción de masas. Hasta el 16 de mayo aún permanecían 70 de las 350 familias que estaban allí cuando comenzó el procedimiento.

### **Cárceles y hacinamiento**

Para la fecha del 16 de mayo se reportan un total de 994 contagios de COVID 19, cinco recuperados y cuatro muertes en las cárceles de Colombia. La situación es alarmante porque las condiciones de prevención del contagio se hacen virtualmente imposibles en tanto hay un 54.9% de hacinamiento en las cárceles del país. El caso de la cárcel de Villavicencio refleja el estado de crisis carcelaria de todo el país: para la fecha del 16 de mayo en el departamento del Meta se reportan 940 casos confirmados de Covid19, en su mayoría en la cárcel de su ciudad capital Villavicencio, en la que se reporta un total 867 personas contagiadas y un 97% de hacinamiento.

A finales de marzo hubo un levantamiento 13 cárceles de Colombia. EL pasado 21 de marzo se inició en la Cárcel La Modelo en Bogotá un motín motivado por insuficientes medidas de protección frente al coronavirus. El resultado de los motines fue 23 presos fallecidos y 83 heridos, además de 9 guardias del Instituto Nacional Penitenciario de Colombia INPEC lesionados, aunque familiares de personas detenidas señalan que los muertos fueron más de 30. Un preso de la cárcel La Modelo en Bogotá declaró al periódico El Espectador: “Acá adentro hay un incendio en el patio de los sindicatos, la razón de la pelea es porque el Inpec nos está violando los derechos a la visita a la libertad, a la expresión, a la salud, la alimentación y los traslados”. A través de su ministra de gobierno, el gobierno señaló que el motín en La Modelo fue un “frustrado “plan criminal de fuga masiva”. La prensa no registra fugas.

El gobierno anunció unas medidas de excarcelamiento de personas no condenadas y algunos

reclusos excarcelables, sin embargo, para el 16 de mayo se ha concedido la libertad al 1% de las solicitudes de excarcelación (566 de los más de 5.600) Sumado a esta deplorable situación de hacinamiento y asesinato en las cárceles, se desconoce del paradero de algunas presxs políticxs, que fueron trasladadxs de manera arbitraria de sus celdas y a la fecha (mayo 17) no se tienen noticias.

### **Decreto de ampliación del SMO**

Por efecto de la pandemia el pasado 13 de abril el gobierno emitió el Decreto 541 de 2020 por el cual prolonga el tiempo de prestación del servicio militar obligatorio que estaban próximos a cumplir su tiempo de prestación. El decreto está justificado en la necesidad de “fortalecer las acciones de control militar en las zonas de frontera, cascos urbanos y área rural, además para brindar ayuda humanitaria a las comunidades más vulnerables de Colombia y apoyar las operaciones necesarias para controlar y mitigar el estado de emergencia sanitaria declara (sic) por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión a la pandemia”.

A pesar de esta justificación el decreto no señala con ninguna claridad la relación de la medida con la emergencia sanitaria, es una medida que afecta las garantías constitucionales de 16.241 jóvenes y parecer ser una ramplona medida para subsanar las implicaciones de que la cancelación del proceso de incorporación previsto para el inicio del año por razón de la crisis sanitaria. Este decreto no representa ningún recurso para un efectivo fortalecimiento de las acciones de control militar por la emergencia, simplemente representa el mantenimiento del pie de fuerza y que pasa por encima de la ley de reclutamiento y además, como lo han denunciado organizaciones protectoras de derechos humanos, no se ajusta al sistema de protección de derechos humanos del sistema interamericano.

A partir de esto, es importante cuestionarnos la situación en los batallones, dado que puede ser un riesgo a la salud de los jóvenes, además que es tiempo de priorizar las inversiones en el sector de salud, cosa que puede verse truncada al seguir

volcando el presupuesto en el sostenimiento de un Ejército que incluso se ha visto en escándalos de sobrecostos en la adquisición de elementos de bioseguridad, por ejemplo, los tapabocas que adquirirían a \$10 dólares estadounidenses por unidad.

Por último, desde las distintas organizaciones antimilitaristas del país, se ha empezado a cuestionar sobre las próximas jornadas de reclutamiento, ya que también es un tema a priorizar durante este contexto de pandemia. Es así, como invitamos a cuestionarnos las medidas de bioseguridad con las que dentro del Ejército se está atendiendo a esta situación, puesto que, tanto los jóvenes que se encuentra prestando servicio como aquellos con los que el Ejército había proyectado a reclutar en este año. No queremos que más jóvenes para la guerra y así mismo es vital realizar un seguimiento de las acciones que pueda llevar a cabo la Fuerza Pública para el segundo contingente de 2020, de modo que no se vulneren ni los derechos de los jóvenes ni que tampoco el cumplir con estas proyecciones pueda llegar a ser un riesgo para la salud de las personas.

### **Lo que no se detiene...**

Los pasados meses de marzo y abril comunidades del municipio de Bojayá, también en el departamento de Chocó, denuncian la grave situación de DDHH y DIH, al presentarse enfrentamientos entre los grupos armados AGC y ELN, causando la explosión de 10 granadas fragmentarias al interior de las comunidades, dicha confrontación se mantuvo durante 10 días afectando a 345 familias afrodescendientes e indígenas quienes se encuentran en confinamiento en el Alta Baudó.

Así mismo, vale la pena destacar que en el contexto de pandemia la erradicación de cultivos ilícitos por medio del Ejército Nacional y el uso de glifosato se encuentra en aumento y el seguimiento a estos casos se dificulta. Uno de los ejemplos más recientes se dio el 18 de mayo de 2020 en Norte de Santander, donde tropas adscritas a la Trigésima Brigada se encontraban en un operativo de erradicación de cultivos de coca y un adulto

de 44 años perdió la vida y tres campesinos más de la zona resultaron heridos en este operativo. De esta manera, se vuelve imperativo realizar una vigilancia de estos actos que se han venido dando de manera sistemática en el contexto de cuarentena. De igual manera, el uso de glifosato ha retomado su fuerza y se han venido dando operativos rociando este químico que no sólo genera un daño muy grande en el ecosistema, sino que también puede llegar a generar problemas de salud severos en las personas que puedan encontrarse al momento de la aspersión.

Es fundamental que se respeten los puntos del Acuerdo de Paz de 2016, donde se hace un énfasis en las acciones a realizar para generar una sustitución de estos cultivos, por lo tanto, es importante también generar inversiones dentro de estos entes encargados de llevar a cabo estos procesos, así como de generar espacios de seguimiento y control para garantizar que estos recursos no se desvíen. Ni un campesino más debe morir a causa de estos operativos, deben garantizarse sus derechos y velar porque estos procesos de sustitución de cultivos ilícitos generen oportunidades de crecimiento equitativas para las personas, a cambio de dejar cicatrices físicas y mentales, o la muerte, a causa de esto.

*Organizaciones de Ramalc en Colombia*

# LOS GRUPOS ARMADOS NO SE FUERON DE CUARENTENA EN COLOMBIA

“LA VIOLENCIA NO ESTÁ EN CUARENTENA”, es una frase que repiten los líderes/as sociales, medioambientales y de derechos humanos de Colombia. Desde que el país entró en confinamiento el 25 de marzo, más de 35 líderes/as sociales han sido asesinados, según los datos de las organizaciones de derechos humanos INDEPAZ. Esto supone más de una persona asesinada cada dos días. Las comunidades rurales y las organizaciones de base tenían muy claro desde el principio, que las restricciones como consecuencia de la COVID-19, así como la pandemia en sí, les harían aún más vulnerables de lo que ya eran. Por esta razón, ya el 18 de marzo, 120 comunidades rurales y organizaciones enviaron cartas a distintos grupos armados, incluyendo las Fuerzas Armadas, guerrillas y paramilitares, pidiendo un alto al fuego inmediato y un acuerdo humanitario. Las cartas fueron enviadas incluso antes de que António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, pidiese un alto al fuego mundial. Hay testimonios que indican que algunas comunidades locales incluso entregaron las cartas directamente a miembros de grupos paramilitares en sus territorios. De todos los grupos armados, solo el Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció el alto al fuego unilateral para el mes de abril, como respuesta a la COVID-19. Lamentablemente, debido a una falta de voluntad política para dialogar con el ELN, el alto al fuego terminó a finales de ese mes.

No era difícil predecir que la cuarentena y la pandemia podrían conducir a más violencia en Colombia, puesto que ya habíamos visto un aumento en los últimos meses de atentados y amenazas contra líderes/as sociales. Según la organización Indepaz, a fecha de 24 de abril, 84 líderes sociales y 24 antiguos combatientes de las FARC-

EP habían sido asesinados desde comienzos de año. Desde el inicio del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, más de 400 líderes/as sociales han sido asesinados, lo que significa que Colombia es el lugar más peligroso del mundo para ser líder social. Muchxs dicen que esta es la verdadera pandemia que azota Colombia. La respuesta del gobierno a esta situación tan grave es básicamente la negación. Hace un par de meses la Ministra del Interior, Alicia Arango, dijo que “mueren más personas por robo de teléfonos móviles que por ser defensorxs de los derechos humanos”.

El Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC-EP puso fin solo a uno de los conflictos en Colombia, conflicto que acabó con más de 260.000 vidas y obligó a casi 8 millones de personas a abandonar sus hogares. Una de las principales causas del conflicto, si no la principal, fue el control de la tierra y los recursos. Hoy en día, esta continúa siendo la causa principal de la violencia que sufre el país. Lxs campesinxs y las comunidades indígenas y afrocolombiana defienden y reclaman sus tierras, que les han sido arrebatadas para imponer enormes proyectos extractivos y de monocultivo, así como para las plantaciones de coca. El tema de la tierra es tan crucial en el conflicto colombiano que el Capítulo 1 del Acuerdo de Paz trata sobre la implementación de una reforma rural integral. No sorprende que este sea uno de los capítulos del Acuerdo de Paz en el que menos se ha progresado. El Fondo de Tierras creado por el acuerdo no ha distribuido ni una sola hectárea de tierra y está lejos de adquirir los 3 millones de hectáreas de tierra que prometió distribuir. Al mismo tiempo, en 2019 registraron cifras récord de cultivos de

coca en Colombia con 212.000 hectáreas frente a las 78.000 hectáreas de 2012. Se estima que los narcotraficantes utilizaron esta coca para producir 951 toneladas métricas de cocaína. Ambas cifras fueron récord y supusieron un ligero aumento con respecto a 2018. Esto demuestra que las causas históricas de la violencia en Colombia siguen estando tan presentes como antes.

Además, aunque se firmó el Acuerdo de Paz con las FARC-EP, según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), a finales de 2018 había cinco conflictos armados en Colombia, incluyendo conflictos con guerrillas como el ELN, disidentes de las FARC-EP y grupos paramilitares como los Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Según el CICR, en 2019 hubo 355 víctimas de artefactos explosivos y minas, 25.300 personas fueron desplazadas por la fuerza y hubo 918 violaciones del derecho internacional humanitario.

Con este contexto, no sorprende que el confinamiento impuesto haya supuesto un mayor riesgo para las comunidades locales. El hecho de que las personas tengan restricción de movimiento significa que son un blanco mucho más fácil para los grupos armados ya que, según las comunidades, estos se mueven libremente y están utilizando la restricción para imponer un control aún mayor de los territorios. En varios lugares, como por ejemplo en la región de Putumayo, los grupos paramilitares son los que imponen la cuarentena. La única respuesta del gobierno a esta violencia es más militarización, con el envío de más tropas, pero sin presencia civil. El hecho de que organismos nacionales e internacionales como la Oficina del Defensor del Pueblo o la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como las ONG de derechos humanos no puedan llegar a los territorios, solo empeora la situación, ya que contribuyen enormemente a la protección por presencia y por medio de misiones de verificación cuando ha tenido lugar un atentado o una amenaza. Esto significa que, con toda probabilidad, la mayoría de los casos recientes se sumen a la larga lista de casos de impunidad del país que según la organización somos defensores en lo últimos años asciende a un

95% de impunidad en los últimos años para casos de ataques a representantes de organizaciones sociales y comunitarias.

Una consecuencia directa de la cuarentena en todo el país es el impacto del confinamiento en las comunidades rurales. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), en una única región, la de Alto Baudó, al menos 3.083 personas (824 familias) pertenecientes a 23 comunidades indígenas y afrocolombianas están confinadas. Los habitantes de Ibudó y Padadó en el norte de Chocó se enfrentan a una situación parecida, mientras sufren graves problemas de salud, agravados por la falta de medidas gubernamentales para las comunidades confinadas. En la zona rural de Buenaventura, las comunidades indígenas hablaron sobre el hecho de que, en menos de una semana, tres niños indígenas han muerto como consecuencia del confinamiento.

Al igual que vemos en muchos otros países de Latinoamérica, en Colombia hay una crisis carcelaria histórica con graves niveles de hacinamiento, lo que hace que los presos sean especialmente vulnerables a la COVID-19. El 22 de marzo se produjeron varios motines simultáneos de protesta contra el hacinamiento en el que murieron 23 personas y hubo decenas de heridos en la cárcel de La Modelo. Ya estamos viendo muchos casos de presos con el virus, por ejemplo en la cárcel de Villavicencio donde hay más de 800 casos y una víctima mortal a raíz de la COVID-19. Esto provocó un motín y un intento de fuga. El 24 de abril, los internos de la cárcel de Picota iniciaron una huelga de hambre para exigir medidas inmediatas para hacer frente a los riesgos a los que se enfrentan por el hacinamiento de la cárcel.

El 24 de abril, representantes de más de cien comunidades rurales volvieron a pedir al presidente Duque que pida un alto al fuego y un acuerdo humanitario. En su carta de 18 de marzo a los grupos armados, las comunidades decían “aprovechemos la COVID-19 para pensar en la vida de cada uno de ustedes, la vida de cada uno de nosotros, la vida del país”.

*Martín Díaz*

Desde Venezuela

# VENEZUELA, IMPERIALISMOS Y MILITARIZACIÓN

LA RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES venezolanas a la emergencia del Covid-19 ratifica la profundidad del pensamiento militarista instalado en el país. Bajo la presión de dos imperialismos, el de Estados Unidos y Rusia, las organizaciones sociales del país continúan insistiendo en una salida pacífica, soberana y democrática del conflicto.

La relación de Estados Unidos con la Venezuela bolivariana ha sido, como lo describe el politólogo Carlos Romero, “esquizofrénica”: “Un gobierno que sataniza a EEUU pero que, al mismo tiempo, obtiene grandes beneficios comerciales de ese país: Venezuela envía 1.300.000 barriles diarios de petróleo y derivados al mercado estadounidense -41% de las ventas totales-, de donde importa bienes y servicios”. Siendo cierta la confrontación entre ambos países, agudizada desde el inicio de la presidencia de Donald Trump, la realidad refuta el mito “Estados Unidos ataca a la revolución bolivariana por su interés en apropiarse del petróleo venezolano”. De hecho, la empresa Chevron participa en 4 proyectos de extracción de petróleo dentro del país bajo la modalidad de “Empresas mixtas”, creadas por Hugo Chávez en el año 2007 para atraer inversión privada internacional a la actividad de extracción de energía, cuya actividad genera 9 de cada 10 dólares que ingresan al país. La relación está cambiando ahora, cuando la administración Trump ha asumido la política de “máxima presión sobre Maduro”, aumentando las sanciones financieras que obligarán a Chevron cerrar sus operaciones en Venezuela el próximo 1 de diciembre. La decisión intenta influir el voto latino en las próximas elecciones estadounidenses en la que Trump busca su reelección. A pesar de cierta retórica públi-

ca de funcionarios de la Casa Blanca que afirman que “Todas las opciones están sobre la mesa” para acabar con el gobierno de Nicolás Maduro, fuentes informadas dentro del país descartan la posibilidad de una intervención militar. Geoff Ramsey, miembro de la ONG progresista Oficina de Washington para América Latina (WOLA), ha declarado: “EEUU ha descartado una intervención por razones políticas, saben que sería impopular en la región porque hasta ahora el Grupo de Lima -coalición de gobiernos latinoamericanos - se ha mantenido firme en apoyar una salida pacífica. Y también sería impopular dentro de EEUU, no hay mucho apoyo doméstico para intervenciones militares en otros países luego de las experiencias de Irán y Afganistán. Y mucho menos en temporada de campaña electoral”.

No obstante, una discusión honesta sobre la injerencia imperialista en Venezuela debe incluir a Rusia. En su estrategia de construir un “mundo multipolar”, Hugo Chávez primero y Nicolás Maduro después, se han hecho alianzas con países como Irán, Corea del Norte, China, Turquía y Rusia. Este último ha invertido 17.000 millones de dólares en inversiones de petróleo y gas en Venezuela. Entre ambas naciones hay un convenio para abrir la primera fábrica de fusiles Ak-103 en América Latina, con capacidad para ensamblar 25 mil fusiles y 60 millones de cartuchos al año, y que había previsto su apertura para finales del año 2019. Hasta que en el país apareció una crisis económica, consecuencia de la caída internacionales de los precios del petróleo y gas, Venezuela lideraba regionalmente la importación de armas, según las cifras del Instituto de Investigaciones de Paz de Estocolmo (SIPRI). Su principal provee-

dor de armamento fue Rusia, que para el año 2012 vendió equipamiento militar por 410 millones de dólares. Entre los años 2000 al 2009 Venezuela compró al estado ruso armas por 2.068 millones de dólares. Un ejemplo de la influencia actual de Vladimir Putin lo constituye la asesoría militar que oficiales rusos realizaron a soldados venezolanos en el terreno para enfrentar el reciente intento de invasión armada por las costas del país, conocido como “Operación Gedeón”.

La participación de Estados Unidos y Rusia en la crisis venezolana ha ocasionado que algunos analistas, como Andrei Serbín de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES), sostenga que el conflicto se ha transformado en una “disputa geopolítica”, a la que suma la participación de China.

### **Covid-19 y militarismo**

Venezuela posee una tradición militarista anterior a la revolución bolivariana, que fue profundizada por el triunfo electoral de Hugo Chávez a finales de 1998. Al inicio del período democrático, en 1958, los principales partidos -con exclusión del Partido Comunista- suscribieron un acuerdo de alternabilidad conocido como el “Pacto de Punto Fijo” que, entre otros objetivos, buscaba “devolver a los militares a los cuarteles”, subordinándolos a las autoridades civiles. Y aunque mantuvieron un importante protagonismo en las décadas posteriores, su beligerancia política abierta comienza en 1999, cuando la nueva Constitución les otorga el derecho al voto. La primera política social ejecutada por el chavismo, el “Plan Bolívar 2000”, fue implementada por el ejército venezolano. Militares activos, o en situación de retiro, comenzaron a dirigir ministerios, gobernaciones y alcaldías. Una lógica militar, y no de movimientos de base, fue la que organizó desde el Estado al movimiento bolivariano, con estructuras verticales, nombres y una narrativa basada en el imaginario de las Fuerzas Armadas.

En el año 2013 las expectativas que un presidente civil, Nicolás Maduro, detuviera la tendencia militarista se evaporaron rápidamente.

Una de sus primeras decisiones fue permitir la participación de militares en tareas de seguridad ciudadana. En el año 2015 comenzaron los llamados “Operativos de Liberación del Pueblo” (OLP), de manera conjunta entre fuerzas militares y policiales en barrios populares, que en sus primeros cinco meses ocasionaron 245 víctimas de violación al derecho a la vida, según datos del Ministerio Público. En el año 2017 las OLP fueron sustituidas por una nueva policía, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), creadas para actuar en operaciones de alta letalidad (secuestros y operaciones antiterroristas), pero que en la práctica pasaron a protagonizar operativos de seguridad ciudadana similares a la OLP.

La grave situación de derechos humanos en Venezuela ha sido reflejada en el más reciente informe sobre el país del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, resultados divulgados por Michelle Bachelet. Sobre la FAES afirma: “Miles de personas han sido asesinadas en supuestos enfrentamientos con fuerzas estatales en los últimos años. Existen motivos razonables para creer que muchas de esas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad, en particular las FAES”, incluyendo en sus recomendaciones: “Disuelva las FAES y establezca un mecanismo nacional imparcial e independiente para investigar las ejecuciones extrajudiciales”. En una actualización sobre la situación del país, realizada en septiembre de 2019, Bachelet se refirió al uso de tribunales militares contra civiles, cuando rechazó la sentencia de 5 años contra el sindicalista Rubén González: “La aplicación de la justicia militar para juzgar a civiles constituye una violación del derecho a un juicio justo, incluido el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial”.

Ante su creciente impopularidad, las Fuerzas Armadas constituyen el principal pilar de apoyo del gobierno de Nicolás Maduro, cuya gestión ha ocasionado que más de cuatro millones de venezolanos hayan abandonado el país como migrantes forzados, según datos de ACNUR. La perse-



cución por razones políticas es particularmente hostil contra militares descontentos y el sector del bolivarianismo, denominado “chavismo crítico”, opuesto a su gobierno. Según los datos de Provea 44 de sus miembros han sufrido detenciones, hostigamiento y despidos de sus trabajos, con un caso de una persona asesinada, Alí Domínguez, el 6 de marzo de 2019. De la cifra actual de 402 presos políticos, según el Foro Penal, dos de ellos son militares que ejercieron altos cargos durante la presidencia de Hugo Chávez: Raúl Baudel y Miguel Rodríguez Torres.

La militarización existente hoy en Venezuela también se refleja en la respuesta de las autoridades al Covid-19. Más que una emergencia sanitaria, el virus está siendo enfrentado como un enemigo político y militar. Un decreto de estado de alarma ha ordenado una cuarentena desde el 13 de febrero de 2020, de manera similar al resto del mundo. Lo que es diferente es la exclusión del conocimiento médico y técnico en la respuesta, de espaldas a todos los sectores de la sociedad útiles en este momento. La vocería ha suprimido al ministro de salud, siendo asumida por la directiva del Partido Socialista Unido de Venezuela y el ministro de defensa. Para mantener al máximo el control de la información, sólo se ha habilitado a un laboratorio en todo el país para realizar pruebas de despistaje, con una capacidad diaria para un máximo de 200 pruebas. Al aprovechar la cuarentena para aumentar los mecanismos de control de la población, el gobierno ha incrementado la censura hasta el punto de criminalizar al único informe divulgado públicamente sobre posibles escenarios de contagio, realizado por la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. En dos meses de Cuarentena dos personas han sido asesinadas por participar en manifestaciones, 22 periodistas han sido detenidos por realizar su labor informativa y 11 médicos por denunciar que no tenían implementos suficientes en los hospitales.

Organizaciones sociales y populares venezolanas han insistido en una salida democrática y pacífica del conflicto, donde las personas puedan decidir, en elecciones libres, el destino del país, rechazando las injerencias tanto de Estados Unidos como de Rusia. El cierre de la posibilidad de una salida no violenta está generando condiciones para la aparición de la violencia.

*Rafael Uzcátegui*

# SEGUNDO COMUNICADO SOBRE MILITARIZACIÓN Y COVID 19

DESDE LA DECLARACIÓN DE ALARMA POR PARTE del gobierno de Venezuela en marzo de 2020 para tratar la pandemia del Covid 19, la respuesta por parte del Estado ha sido bajo la lógica del militarismo, manteniendo una cuarentena forzada para la población, manejando unas cifras no contrastables por el gremio médico, empleando el aislamiento contra los migrantes que están retornando y manteniendo un discurso xenófobo, afirmando que las personas contagiadas en su mayoría provienen de países de la región como Colombia.

La cuarentena implementada por el Estado se realiza en condiciones precarias para los sectores populares, donde el sustento diario depende del trabajo cotidiano, paralizado de momento, con acceso limitado al agua, sin gas y con cortes de luz. Lo que hace de la supervivencia del venezolano, una ardua labor cotidiana.

Aunque en los últimos días, el número de personas contagiadas ha aumentado, la Academia de Ciencias Físicas, Naturales en un informe que elaboraron proyectan que el pico de la pandemia estaría entre julio y septiembre de 2020, entre 4000 y 5000 contagiados diarios. Estas declaraciones fueron señaladas por parte del capitán Diosdado Cabello, solicitando que los organismos de seguridad interviniesen y realizasen detenciones por el simple hecho de informar.

A este escenario de confinamiento, se le une un lamentable y confuso hecho insurreccional que ocurrió con el supuesto desembarco de una lancha en la costa de Macuto (Edo. Vargas) con un grupo de 8 exmilitares que intentaron un desembarco armado, los cuales fueron repelidos por las Fuerzas Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). En una rueda de prensa se co-

noce que los asaltantes fueron muertos y se conoció la foto de dos de ellos, que circularon en las redes sociales, irrespetando el duelo de los familiares.

Ese mismo día se conoce en las redes sociales el inicio de la Operación Gedeon por parte de un grupo de militares disidentes que se dieron a conocer como la Coalición Activa de la Reserva Internacional Venezolana (CARIVE) compuesta por varias unidades que estaban ingresando al territorio para realizar acciones destinadas a derrocar a Nicolás Maduro. El martes 05 de mayo con las costas militarizadas, se realiza un segundo desembarco en Chuao (Edo. Aragua) por 8 personas, sin armamento que fueron reducidos por la milicia, policías regionales y helicópteros del ejército; entre los detenidos se encontraba los principales voceros del grupo, el hijo de Isaías Baduel, exministro de defensa y preso político; así como dos mercenarios norteamericanos miembros de la contratista Silvercorp.

La presencia de dos norteamericanos en actividades armadas en Venezuela fue ratificada por Jordan Goudrou, CEO de la contratista norteamericana, denunciando en el Washington Post y canales del exilio venezolano en los EEUU, donde afirmaba la existencia de un contrato firmado por el jefe de estrategia de Juan Guido. Días después, Juan José Rendón admitió la firma del contrato, pero no avaló su ejecución, lo cual no lo exime de responsabilidades en los hechos.

Este lamentable hecho insurreccional fue aprovechado desde el Estado, para realizar allanamientos sin orden judicial, realizar confusas detenciones y el señalamiento desproporcionado, por parte del Estado, distorsionando la labor

de organizaciones de noviolentas de defensa de derechos humanos como el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), del cual forman parte 03 activistas de Laboratorio de Paz, un colectivo miembro de la RAMALC. Acusándolos de “brindar apoyo” a los invasores, debido a una serie de tweets donde se exigía: 1) que se respetase la vida y el debido proceso a los detenidos; 2) que no sufrieran desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura o trato denigrante; 3) El liderazgo político y ciudadano debe, sin ambigüedades, ratificar que será la estrategia política noviolenta la que nos haga transitar del autoritarismo a la democracia; 4) Comunidad internacional debe rechazar salidas violentas para Venezuela, aumentando las presiones diplomáticas y las sanciones individuales contra violadores DDHH.

Pese a la lamentable incursión armada, el tratamiento por parte del Estado y la irresponsabilidad por de los sectores de oposición, forman parte de los retos que debe afrontar el venezolano en la pandemia del Covid-19, con precarias condiciones de vida y la militarización del territorio nacional.

Frente a la pretendida militarización de la crisis de salud desde el Estado, la sociedad de forma horizontal y asamblearia sigue respondiendo con solidaridad para afrontar el Covid-19.

*Autocuidado-Apoyo Mutuo- Antimilitarismo*

*Laboratorio de Paz*



**Desde Bolivia**

# **COVID-19: ENTRE EL GASTO MILITAR Y LOS CUIDADOS COLECTIVOS**

## **Gasto militar en Bolivia.**

Bajo el término de “Defensa o seguridad” es que se justifica el gasto militar en Bolivia por las autoridades de turno. Conforme a datos del año 2018 Bolivia gasta 510,5 millones de dólares lo que representa un 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) el gasto per cápita es de 45 euros por habitante y representa el 3,88% del gasto público total en defensa.

Aun no hay registros del gasto militar para este 2020 pero a título de la pandemia COVID-19 se van justificando y legalizando gastos militares que representan un incremento considerable, como lo demuestra el Decreto Supremo 4230 de 20 de abril de 2020, mediante el cual se asigna Recursos Adicionales de más de 26.2 Millones de bolivianos para ejecución de trabajos de mantenimiento en vía de acceso al sitio Radar SANANDITA, alimentación y socorro, movilización y desmovilización del personal de tropa de las Fuerzas Armadas FFAA. Además, con la Resolución Ministerial N° 43 del 7 de febrero de 2020, militares y policías están exentos de registrar sus compras, se aplica a compra de armamento, pertrecho y equipamiento anti motín.

Los datos llaman la atención ya que Bolivia es un país sin conflicto civil, ni guerra internacional probable por lo tanto el presupuesto militar anual podría ser mejor empleado para salud, trabajo y educación que tanta falta hace, más un en esta crisis sanitaria.

Las Fuerzas Armadas en Bolivia han desplegado desde el inicio de la emergencia sanitaria nacional, más de 47.000 efectivos militares en todo el país, con el fin de que la población cumpla con la cuarentena. Con la actual coyuntura muchos más municipios han sido militarizados, se arresta a toda persona que este circulando por las calles sin autorización seguido a un proceso penal, ya son más de 2500 personas arrestadas y cada día en los diferentes departamentos hay personas en las calles reclamando porque se han acabado sus alimentos, pero a la vez hay una cooptación política que se aprovechan de las necesidades de las familias.

## **Las mujeres y los cuidados colectivos frente a la militarización**

En las comunidades del altiplano boliviano también están los militares con tanques en medio de las calles, cuentan las mujeres que no les permiten ni trasladarse a dar alimento a sus animales, que deben escaparse en horas de la madrugada para cosechar, a título de la cuarentena se está generando violencia psicológica con miedo, con la restricción de derechos, así también hay represión a las mujeres impidiéndoles vender sus productos.

Las mujeres en las comunidades nos están enseñando que una forma de hacerle frente a la militarización de los cuerpos y de los territorios, es a través de los cuidados colectivos para soste-

ner la vida, poniendo la vida en el centro, tejiendo solidaridad, haciendo respetar los derechos, con la escucha, el dialogo, la reciprocidad y luchando contra este modelo de desarrollo en el que prima solo el capital.

La pandemia COVID-19 y la crisis actual nos permite ver que la Madre Tierra está buscando equilibrio, que se puede vivir sin extractivismo, pero sin alimentos y sin agua, no hay vida. No se necesita que el Estado y los militares nos cuiden con armas y violencia, entre nosotras nos cuidamos con solidaridad.

*Oruro, mayo de 2020*

*Benjamín Tarqui – JEA 2.0*

*Ángela Cuenca – Colectivo CASA*



Desde Ecuador

# SITUACIÓN EN EL ECUADOR FRENTE AL COVID -19

ECUADOR REPORTA HASTA EL 20 DE MAYO 34.854 casos de COVID – 19, de los cuales 4.693 han fallecido. Estas cifras son de las más altas en relación con el número de habitantes por país. Muchos factores suman a que esto sea así. Entre los principales podemos mencionar: 1) desigualdad, 2) falta de inversión en salud, 3) poco apoyo a la agricultura campesina y 4) elevado gasto militar, entre otros factores.

Respecto a la desigualdad social, podemos mencionar que, en el país, mucha gente vive al día, ya que se dedica a empleos informales, o trabajos ocasionales, pues no existen otras fuentes de ingresos. Este factor genera que muchas personas se vean obligadas a salir y ponerse en riesgo, ya que no tienen otra opción.

La falta de inversión en salud por otro lado ha sido lamentable en el país, cuando la pandemia inicio el país no disponía de materiales de protección para los hospitales, debido a la reducción constante del presupuesto de salud en los últimos años.

Al mismo tiempo no hay ningún apoyo a la producción campesina, que produce más del 60% de los alimentos que estamos consumiendo en esta crisis, lo cual genera que tengamos dependencia de alimentos agroindustriales y tengamos poco acceso a alimentos sanos y nutritivos en esta emergencia.

Finalmente, el Ecuador es uno de los que mayores gastos militares tiene en la región, y este presupuesto al contrario de lo que pasa en salud no se ha reducido. El gasto militar actualmente asciende al 2,4% del PIB que corresponde a más de 2.500 millones de dólares.

Con este panorama, es bastante claro, porque el Ecuador es uno de los países más afectados de la región.

*Ramalc en Ecuador*

Desde Perú

# MILITARIZACIÓN EN TIEMPOS DE COVID-19 (PARTE 2)

AL MOMENTO DE ESCRIBIR ESTE BREVE INFORME en Perú nos encontramos con 104 mil casos de personas registradas como positivas al COVID-19 en todo el territorio peruano, aunque según diferentes informes esta cifra es menor a la real. Lo que no sale en las cifras pero que lo vivimos en carne propia, es cómo la crisis vírica está desnudando la desigualdad estructural y el carácter de depredadora ambiental de la que está hecha nuestras sociedades.

## Morir de hambre o de coronavirus

Como comentamos en el primer boletín, durante toda la cuarentena se ha legitimado el ethos militarista basado en el nacionalismo, la lógica patriarcal y el control biopolítico. Por otro lado, la cuarentena viene causando mayor precariedad y desigualdad. Así vemos que durante la evolución del distanciamiento físico, las diversas políticas implementadas desde el gobierno han fallado para atender a las necesidades sociales, y el pueblo, sobre todo trabajadorxs autoempleadxs, campesinos, indígenas, mujeres y racializadxs se han enfrentado a ello con diversas formas de resistencia y lucha para sobrevivir, así como para denunciar los abusos cometidos por un Estado que pone por encima de la vida de sus ciudadanxs, al mercado. Las “ayudas” a través de bonos económicos han seguido los esquemas de focalización que han dejado fuera a miles de peruanos/as, motivo por el cual no ha quedado otra opción salvo volcarse a las calles a buscar el pan. Muchas personas son entrevistadas en las calles, calificadas de ignorantes y cuestionadas por exponer sus vidas, a lo que responden: “Si no me mata el Virus, me mata el hambre”. Lxs trabajadorxs autoempleados han

inundado las calles siendo duramente reprimidos en mercados y plazas por la policía, en algunos casos se les arrebató incluso su herramienta de trabajo, se les golpea y se les castiga por intentar garantizar el sostenimiento de sus hogares. Lxs campesinxs, en abandono total, teniendo que perder cultivos y los ingresos que esto les provee por la falta de medidas que aseguren su transporte seguro y los proteja de la especulación de precios. Pese a ser el sector gracias al cual millones de familias pueden alimentarse y reforzar su salud, siendo junto con otros trabajadores como los de la salud y sanidad pública, esenciales para enfrentar la pandemia, es supeditado a la preeminencia de los sectores financieros e industriales.

## Quédense en casa y lávese con agua y jabón durante 20 segundos

En las ciudades, la pandemia ha impactado duramente, se ha visibilizado aún más la desigualdad existente: el hacinamiento ha jugado a favor de la propagación del virus, un millón de hogares viven en condiciones serias de hacinamiento, contando con una habitación, donde el confinamiento se dificulta y se generan además condiciones para la violencia contra las mujeres, niñas y niños exponiéndolxs a convivir con sus agresores en espacios reducidos. Asimismo, los servicios básicos son insuficientes, aproximadamente 7 millones de personas en todo el país no cuentan con agua potable sobre todo en los sectores populares, donde el virus ha impactado duramente y parece una burla pedirles que se laven las manos por 20 segundos o que usen alcohol en gel. Aunado a todo ello, cerca de un millón y medio de limeñxs han perdido sus trabajos y gracias a

la presión de los grupos empresariales se vienen implementando un paquete de normas que garantizan el retorno a las actividades económicas con estándares flexibilizados para no “generar sobrecostos al empresariado”. En la narrativa hegemónica se quiere además imponer la necesidad de potenciar las actividades extractivas para reactivar la economía, dejando de lado la protección de la salud por las ganancias, los principales medios de comunicación vienen defendiendo la idea de potenciar la industria minera a pesar que durante la cuarentena se han registrado 603 casos de trabajadores infectados.

En Lima, ciudad de la concentración de servicios, se han asentado miles de migrantes, una de las comunidades emblemáticas es la shipiba-conibo, población indígena amazónica que vive en la zona de Cantagallo, ubicada a 10 minutos de Palacio de gobierno, donde no se han implementado ningún tipo de medidas sanitarias pese a conocer las condiciones de hacinamiento y de carencia de servicios, a la fecha la comunidad cuenta con 72% de contagiados de 656 muestras tomadas, 476 dieron positivo. El día en que se conoció la cifra el gobierno no tuvo mejor idea que militarizar el perímetro de la comunidad, colocando un cerco humano y de rejas por un periodo de catorce días. Se trata de una cuarentena forzada dentro de la propia cuarentena que se sigue a nivel nacional desde el 16 de marzo, sin que la propagación del virus de señales de descenso, sin implementación de alguna política diferenciada para la prevención y atención de casos positivos en la comunidad, lo único que se quiere es convertirlos casi en un gueto.

En otras regiones, la situación es aún peor, el sistema sanitario ha colapsado y el personal de salud es precarizado e insuficiente. En el norte y oriente, específicamente en la región de Loreto la situación es grave, se ha denunciado un subregistro de casos y alto potencial de contagio en pueblos indígenas, a quienes se les sigue considerando como ciudadanía de segunda clase, el Ministerio de Cultura y salud brillan por su ausencia en el esfuerzo por controlar la pandemia

sobre esta población, a pesar de que los pueblos indígenas de la Amazonía comienzan a ser infectados y están en las peores condiciones para evitar el enorme daño que la pandemia produce.

### **Nos siguen vigilando y violentando**

Pese a que se pueden observar más a menudo subversiones del orden establecido con las milicias y policías, aún continua la vigilancia pues persiste el toque de queda. Como parte la cotidianidad es posible ver a policías y militares vigilando y acechando. Se registran a diario casos en los que se reprime a gente por sacar su basura o casos más indignantes como los de acoso y violaciones a menores de edad por parte de estos efectivos. El control no es solo sobre nuestras acciones, es también sobre nuestros cuerpos y formas de pensar.

### **Regreso al servicio militar obligatorio**

En el marco de la cuarentena, el partido político peruano PODEMOS ha propuesto el retorno al servicio militar obligatorio. Sin atender que 1 de cada 4 personas que cumplen condena paso por las instrucciones armadas o policiales, es decir el 25% fueron formados por estas instituciones. Asimismo, hace poco registramos que, en medio de la pandemia, un joven fue víctima de tortura durante el servicio militar (hasta ahora voluntario) y del cual aún no se ha podido recuperar. El caso no es aislado, se han registrados decenas de casos de abuso, a los que se exponen principalmente jóvenes de bajos recursos y migrantes, quienes ven en el servicio militar una oportunidad para estudiar o tener algún beneficio ante el desempleo. Sin embargo, muchos de ellos ante la negativa de obedecer órdenes crueles son incluso abusados sexualmente.

Hay una creencia sin fundamento sobre que el servicio militar “corrige” a quien va por mal camino. Las cifras nos indican que no es así, solo los forman para el crimen organizado. Para restaurar vidas es preciso oportunidades: salud, educación y trabajo.



En la propuesta de este proyecto de ley, se coloca la realización del servicio militar como requisito para ser funcionario público, sobre ello, habría que recordar que: 1) históricamente la composición social y de clase de este servicio ha sido de sectores empobrecidos y racializados, 2) los valores militares son opuestos a la participación, colectividad y democracia y 3) en lugar de apostar por militarizar la sociedad, sería importante fortalecer los espacios cívicos, formar pensamiento crítico y alejar a la gente de las armas.

### **Lo social no es ajeno a lo ambiental, y esta relación también es política**

Todo lo que hemos mencionado hasta ahora tiene una relación con lo ambiental, la cual es sistemáticamente invisibilizada para la conveniencia del capital.

A pesar que se conoce que las causas de la crisis vírica provienen de la destrucción de la biodiversidad, de los bosques y millones de ecosistemas necesarios para mantener el equilibrio socioambiental, que perecen por el avance de las actividades industriales, el extractivismo, la urbanización y el consumismo, las reflexiones sobre estas causas y medidas para afrontarlo desde un enfoque político ambiental y sistémico, son casi inexistentes. El Perú, como muchos países latinoamericanos, ha sido tratado desde hace más de 500 años como territorio de conquista para la adquisición de materias primas con lo cual se ha construido lo que hoy llamamos el sistema mundo moderno, con centros o núcleos de poder global y periferias funcionales a estos. Esta lógica de dominio colonial del capitalismo ha provocado no solo crisis profundas a nivel social y económico, sino también crisis ambientales como la que pasamos hoy con las pandemias o el cambio climático, que a la vez repercute en lo social, por ejemplo, afectando las condiciones de vida, la provisión de alimentos, de salud, de trabajo, de cuidados y de un ambiente sano y seguro. Y pasa que, en vez de apuntar a la comprensión y atención de estas causas, las políticas de los gobiernos colonizados tienden hoy a reforzarlas, dinamizando más

al capital para adaptarla a los nuevos escenarios, como muestran con las propuestas de “economía verde” o lo que podríamos llamar como economía “pandémica” las cuales se reconfigura capitalizando industrias farmacéuticas, alimentarias, militares, de virtualización y otros, provocadas por estas crisis. Es por esta razón que en la región buena parte de las medidas para la “recuperación económica” frente a la pandemia están ligadas a la ampliación de los proyectos extractivos, que siempre van de la mano con mayor flexibilidad laboral y militarización territorial. La ejecución de esas medidas seguirá destruyendo ecosistemas, exponiéndonos a diversos patógenos progresivamente, lo cual nos llevará a otras crisis víricas y nuevamente al ciclo de la reconfiguración del capital, pues así el mercado nunca pierde. La mirada de supremacía humana, la subjetividad de la conquista militar sobre la naturaleza es el sustento ideológico. Por ello es importante visibilizar y politizar la relación socioambiental de la crisis vírica y nombrar sus causas sistémicas para que las acciones de cambios sean duraderas y reales. Es claro que los Estados y gobiernos cuyo interés sean las ganancias del mercado en este escenario no lo harán, pero depende de los pueblos en resistencia, muchos de ellos que nos venido advirtiéndolo que esto pasaría, depende mucho de lo que hoy aprendemos y de nuestras para cambiar este rumbo.

### **Tendencias y núcleos desde dónde se defiende y construye “lo nuevo”**

Este escenario en Perú, y como pasa en otros países de la región, permite ver con más claridad en qué se han convertido los Estados en los últimos 30 años, cómo es que el neoliberalismo ha suprimido tanto su rol como garante del bienestar social y los derechos humanos, para convertirlo en garante del gran capital. Por esta razón, vivimos hoy en día los colapsos de todos los sistemas públicos, principalmente el de salud, de seguridad social y educación. Como también estamos siendo objeto de estrategias de reactivación económica donde lo que se busca sobre todo es el

salvataje de los intereses privados de las élites de poder más la profundización del modelo extractivo, que el resguardo de los derechos laborales, el cuidado y el fortalecimiento de la salud pública, la recuperación de los millones de economías familiares afectadas y el cuidado ambiental. La lógica detrás sigue siendo capitalizar la crisis y afianzar los dominios económicos sobre los sociales y ambientales. Por último, muestra que el control y la vigilancia policiaca y militar como modo de gobierno social se ha afianzado, y que, en el tiempo próximo, tanto las élites militares como su influencia en los espacios de poder nacional y regional, serán mayores.

Sin embargo, como ha pasado en otros tiempos en que como país y región tuvimos que vivir situaciones similares, ya sea en las dictaduras militares o en las épocas de shock económicos, los sectores precarizados venimos sosteniendo la resistencia a través de acciones organizadas de solidaridad comunal y popular que constituyen, lo que podríamos llamar, núcleos de buen sentido o de transformación. Se han organizado ollas comunes, gestión territorial de comunidades, trueques o intercambios de alimentos, acciones comunales para la atención desde la medicina tradicional, construcción de casas de material ecológico para caminantes que retornaban de Lima sus ciudades de origen, envíos de alimentos de diversas regiones del campo para familiares migrantes en las ciudades, grupos de acompañamientos entre mujeres que viven violencia de género en cuarentena, atención colectiva a la salud mental, etc. Son estos núcleos en las ciudades, los barrios, las comunidades y los pueblos indígenas una referencia para la construcción de otras formas de vivir donde el cuidado colectivo está por encima de la salida individual ante las necesidades. No obstante, estos tejidos también quieren ser regulados por las fuerzas del orden, pretenden ser controlados con la excusa del distanciamiento físico que quieren convertir en distanciamiento social, o convertidos en políticas públicas o nuevos negocios, la cual requiere atención y más resistencia. La fuerza vital para afrontar este episodio socioambiental está presente, se alimenta de

las acciones comunales y autogestivas, y también de la imaginación práctica sobre qué tipo de sociedad post-pandemia nos estamos convirtiendo. Obviamente en ello no hay cabida para la militarización en nuestros territorios, mentes y cuerpos.

*Mar Daza y Rosario Grados  
de Ramalca en Perú*

**NO MÁS MILICOS**  
**NO MÁS TOQUE DE QUEDA**  
**¡FUERA DE LAS CALLES AHORA!**



## Desde Argentina

# SIGUEN AHÍ

DESDE QUE COMENZÓ LA PANDEMIA Y POR PEDIDO expreso del presidente de la nación el ministerio de defensa ha asumido un rol activo poniendo todas sus capacidades en acción. Resignificada la institución militar hoy más de 40.000 soldados se desplegaron a lo largo y ancho del país para desarrollar amplias tareas, desde confección de barbijos, camisolines o alcohol en gel, distribución de alimentos, elaboración de comidas nutritivas, repatriación de personas varadas en otros países, el mejoramiento de la sanidad militar, etc.

Hace ya un tiempo que por lo bajo nos quieren vender el cuento del cambio de paradigmas, y a la luz de las incontables urgencias que tenemos que atender a diario es que no advertimos casi cuando fue que empezamos a convivir con ellos nuevamente. Creo que en los lugares pequeños y más alejados de las grandes ciudades es donde más se ignora la cuestión, al punto tal de que cada tanto nos podemos topar con algún nostálgico de la dictadura en la fila del supermercado vociferando estupideces.

Que hoy estén desarrollando una especie de función social o asistencia sin armas como ellos le llaman no implica que sea menos grave, de la misma manera que entendemos que los Estados modernos son por definición militaristas, pues con este y el capitalismo se sustentan. No esta-

ría demás señalar, aunque sea tangencialmente, la contradicción del Estado en su lucha por la erradicación de las violencias hacia las mujeres al mismo tiempo que se sirve y fomenta a una de las instituciones más retrogradadas que aún sobreviven.

Excusas para poder justificarles siempre van a existir como también existe la inteligencia que nunca han dejado de realizar. Informes, investigaciones y espionaje son otra de las tantas tareas que desempeña el ejército argentino y no es para prevenirnos de futuras amenazas sino para perseguir a los enemigos del Estado, aquellos que ponen en peligro la seguridad nacional. Casualmente siempre son personas vinculadas a la lucha social.

Resistencia no hay, o por lo menos no se ve por ningún lado. Pero en algún momento y esperemos no sea demasiado tarde nos estaremos midiendo también con este instrumento del Estado que por mucho que lo quieran aggiornar sigue siendo un brazo armado.

*Cristian Marco, de Ramalc  
en la región argentina*

## Desde Uruguay

LA SITUACIÓN EN URUGUAY NO SE APARTA de la general en la región. Los sectores autoritarios y militaristas intentan aprovechar las circunstancias para reprimir las iniciativas y reclamos populares, tales como las ollas populares y las manifestaciones contra el hambre y la represión. Las ollas populares autogestionadas y la organización colectiva y autónoma de la ayuda mutua hacen parte de la resistencia al autoritarismo de las élites contra los sectores populares

*(resumen de los relatos de lxs amigxs  
de Ramalc en Uruguay)*



Red  
Antimilitarista  
de América Latina  
y el Caribe

Este es un esfuerzo de la Ramalc a través de su equipo editorial integrado en esta ocasión (en orden alfabético) por: *Lila, Julián, Marcela, Pelao, Sea* y quien sea que se nos olvida.

sitio web: [www.ramalc.org](http://www.ramalc.org)

facebook: Red Anitmilitarista de America Latina y el Caribe - RAMALC

# EL MILITARISMO ES EL VIRUS

